

Modulación de sentencias de la Corte Constitucional como medio para el reconocimiento de los animales como seres sintientes en Colombia.

Emilio Aguilar Gómez
Estudiante

Dr. Juan Pablo Sarmiento Erazo
Tutor

Tesina de Grado
Maestría en Derecho

Universidad del Norte
Barranquilla
2017

Dedicatoria

Este trabajo lo dedico a mi hermana Olga Lucia, quien es mi punto de referencia para alcanzar las metas personales y profesionales que me he propuesto en la vida. A ella porque fue mi inspiración para optar el título de magister en Derecho y porque me apoyó física y moralmente durante todo el proceso formativo y de entrega final.

Agradecimientos

Agradezco principalmente a Jesucristo, hijo de Dios, por dotarme de las herramientas necesarias, tanto físicas como espirituales, para terminar esta tesina. A mis padres por enseñarme el valor de la educación continua; a mi tutor por su entrega inmensurable; a mi familia por el apoyo incondicional y la paciencia durante el curso de la maestría; y a mis estudiantes por generar las inquietudes que permitieron nutrir este trabajo.

Tabla de Contenido

Introducción.....	5
Capítulo 1.....	9
1. Modulación de sentencias de la Corte Constitucional de Colombia como alternativa para articular una decisión política.....	9
1.1. Metodología para el análisis de las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia desde la politización de su jurisprudencia	11
Criterios para el análisis político de una línea jurisprudencial	15
1.2. La administración de justicia. Entre la judicialización de la política y la politización de la justicia.....	20
1.3. La modulación de sentencias como alternativa	28
1.3.1. Legitimación de la jurisprudencia como fuente de decisiones políticas.....	29
1.3.2. Precisiones teóricas en torno a la modulación de sentencias.	33
1.3.2.1. Modulación tradicional.	37
1.3.2.2. Sentencias Manipulativas.....	37
1.3.2.3. Sentencias con efectos temporales (o diferidos en el tiempo).	41
1.3.2.4. Sentencias abstencionistas.	43
1.3.2.5. Sentencias exhortativas.....	44
Capítulo 2.....	47
2. Análisis en contexto de los fallos de la Corte Constitucional de Colombia sobre el reconocimiento de los animales como seres sintientes	47
2.1. Determinación de la constitución ecológica como punto de partida de la discusión.....	50
2.2. Técnicas de modulación utilizadas por la Corte Constitucional de Colombia en las sentencias que reconocieron a los animales como seres sintientes en Colombia	55
2.2.1. Sentencias de inadmisibilidad: La libertad de configuración legislativa como criterio para abstenerse de legitimar la protección animal	55
2.2.2. Sentencias interpretativas o condicionales: Construcción jurisprudencial de la concepción de los animales como seres sintientes.....	76
2.2.3. Sentencias exhortativas: Deber de adecuar la legislación a partir de la aplicación indistinta a todos los animales como seres sintientes.	91
CONCLUSIONES	98
Bibliografía	103

Introducción

En el texto que sigue a continuación se analizarán las sentencias que la Corte Constitucional de Colombia profirió en el desarrollo de la protección de los animales, más allá de las posiciones doctrinarias presentadas en las mismas. Por lo tanto, corresponde acudir a un marco teórico orientado por el paradigma del realismo jurídico, a través del cual se analiza la actividad judicial desde perspectivas sociales, políticas, culturales y los ambientes institucionales.

Como lo han sugerido varios autores latinoamericanos siguiendo esa corriente, la jurisprudencia constitucional de Colombia debe ser analizada perspectivas distintas a la exclusivamente jurídica, permitiendo que se descubra el rol político que asume la Corte Constitucional, en ejercicio del control de constitucionalidad frente a temas específicos, los cuales capturan la atención de la opinión pública por tener trascendencia social, política y económica en los diferentes círculos de la sociedad.

En ese contexto, de antaño se ha entendido que en las distintas áreas de la vida donde el hombre desarrolla prácticas en las que se involucran animales, se entiende como normal el dominio que los seres humanos han ejercido sobre estos. Una de ellas, quizá de las más polémicas, son las corridas de toros, consideradas como una expresión artística que iniciaron su comercialización y se expandieron como un negocio al rededor del mundo, creándose escuelas de tauromaquia, de donde han surgido los máximos exponentes de este género en países como España, México, Colombia y Venezuela (Garrido, 2014)

Sin embargo, con el pasar del tiempo la percepción del hombre ha generado cambios frente a la manera de concebir su relación con los demás seres no humanos. De acuerdo a lo anterior se volvió a ver las corridas de toros "no como un espectáculo de arte o cultura, sino como un maltrato animal a toda prueba" (Garrido, 2014). Lo que ha desembocado en que

diversas corrientes animalistas se hayan organizado y se muestren al mundo ejerciendo oposición a las ferias taurinas (Garrido, 2014).

Las corrientes de protección animal en Colombia capturaron la atención de varios actores sociales, académicos y políticos, lo que le permitió ingresar en la agenda discursiva del país, y se constituyó como uno de los asuntos más polémicos y de suficiente atención al interior de los ordenamientos jurídicos en los niveles académico, periodístico, jurídico, social y político (Cárdenas & Fajardo, 2007, pág. xix).

Pese a ello, se despertó el interés en la protección de los animales desde su condición de seres sintientes por parte de distintos sectores de la sociedad y del Estado. Lo antedicho conllevó a que distintos actores sociales y estatales reconocieran la necesidad de incluir ese tema en la agenda del Estado colombiano, a partir del control de constitucionalidad.

De esa manera, fue la tauromaquia la que abrió las puertas a la discusión, a través de la fricción generada entre taurinos y antitaurinos, mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Sin embargo, por su naturaleza, esta discusión fue ingresando en otros campos, logrando evidenciar el rol político de la Corte.

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto pretende establecer si se podrían considerar las sentencias de la Corte Constitucional, como medio para articular una oportunidad política en la construcción del concepto de animales como seres sintientes en Colombia. Para ello se analizarán las sentencias a partir del contexto social y político, y los ambientes institucionales del momento en que se profirieron las mismas, es decir que se revisarán sus pronunciamientos más allá de las posiciones jurídicas que los magistrados presentan.

En principio corresponderá distinguir entre los conceptos de politización de la jurisprudencia y judicialización de la política, aspecto que destacará el curso de esta investigación.

De esta forma, se mostrará la modulación de sentencias como la técnica utilizada por la Corte Constitucional de Colombia para transformar el concepto de animales hacia el de seres sintientes, en medio de una discusión politizada que defienden la permanencia de la tauromaquia en el ordenamiento jurídico.

Para lograr lo anterior, se analizarán las sentencias en que la Corte estudia la constitucionalidad del Reglamento Nacional Taurino y el Estatuto Nacional de Protección Animal, entre otras. Pero, además de estudiar el contenido de las sentencias seleccionadas, también se analizarán los salvamentos de voto que evidencien la influencia generada por el gremio de taurófilos al interior de la Corte, y las reacciones de las otras ramas del poder, teniendo en cuenta la actividad legislativa y la opinión pública a la luz de la técnica de modulación aplicada.

A lo largo de este trabajo se evidenciarán los intereses en mantener la cultura taurina en el país de algunos magistrados que conforman la Corte Constitucional. Igualmente se mostrarán los intereses culturales de algunos actores de los otros poderes públicos, e incluso de organismos de control de mantener la tauromaquia en el ordenamiento jurídico colombiano; a pesar de las advertencias de parcialización que desde inicios de la discusión venían generando los animalistas y la minoría de esa Corte.

Habiendo señalado el objeto de este estudio, se presentará ahora el plan de trabajo que será abordado: En el primer capítulo se mostrará la metodología para el análisis de las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia desde la politización de su jurisprudencia, y se

mostrarán los criterios para el análisis político de una línea jurisprudencial; de igual forma, se revisará la dicotomía que surge entre la judicialización de la política y la politización de la justicia; posteriormente, se expondrá la modulación de sentencias como la alternativa que utiliza la Corte para imponer conceptos propios de los otros órganos del poder público. En el segundo capítulo se analizarán en contexto los fallos de la Corte Constitucional de Colombia, a través de los cuales se introdujo la categoría de seres sintientes a los animales en el ordenamiento jurídico colombiano pasando la barrera del poder judicial, a la luz de las técnicas de modulación de sentencia utilizadas por ella misma.

Capítulo 1

1. Modulación de sentencias de la Corte Constitucional de Colombia como alternativa para articular una decisión política

Hacia el año 2007, momento en que se editó el libro *El derecho de los animales*, los profesores Cárdenas y Fajardo consideraban que en Colombia, como en muchas partes del mundo, no se le había dado importancia a la realidad de la situación animal por el desconocimiento de la subjetividad jurídica de los animales, atribuyendo este desconocimiento a la escasez de fuentes en español producidas en el país, o traducidas a nuestro idioma (Cárdenas & Fajardo, 2007, pág. xix).

Frente a esto, se reconoce que los autores de cita desarrollaron un amplio trabajo teórico acerca de la subjetividad jurídica que radica en los animales. No obstante, a pesar de haber mostrado importantes estudios realizados por otros juristas, no dieron cuenta de las tensiones que para entonces, ya estaban siendo objeto de discusión por parte de la Corte Constitucional de Colombia y del Congreso de la República, frente al desarrollo del concepto de animales como seres sintientes en Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo pretende establecer si se podrían considerar las sentencias de la Corte Constitucional, como medio para articular una oportunidad política en la construcción del concepto de animales como seres sintientes en Colombia. Para ello se acudió a una metodología que obliga a revisar los pronunciamientos de la Corte más allá de las posiciones jurídicas que los magistrados presentan.

En ese sentido, se consideran las corrientes del realismo jurídico desarrolladas en Norteamérica, como las pioneras en el análisis transversal de los fallos de la Suprema Corte de

los Estados Unidos en materia de control de constitucionalidad, pues entiende la complejidad que trae consigo manipular el ordenamiento jurídico amparado en la defensa de la supremacía de la Constitución. En igual sentido, se atenderán las disertaciones que en materia de realismo jurídico se han desarrollado en la doctrina local.

Siendo así, para lograr este objetivo, será necesario analizar las sentencias de constitucionalidad proferidas en torno a la protección de los animales, bajo la óptica del contexto social y político en que se adoptó la decisión. De esta forma, se evidenciará el rol político que ejerce la Corte Constitucional de Colombia desde la rama judicial del poder público. En tal sentido, el profesor Rodríguez-Raga desarrolló la teoría de la jurisprudencia estratégica, a través de la cual demuestra el fenómeno interactivo que existe entre los poderes públicos¹.

De tal manera que, el autor de citas especifica cómo las preferencias políticas de los tribunales y el gobierno, y sus evaluaciones de los riesgos personales e institucionales involucrados en su toma de decisiones interactúan con el entorno institucional y el contexto político.

En esa misma línea, el profesor Mario Cajas Sarria propone una metodología para la construcción de una narrativa de la Corte Suprema de Justicia de Colombia a la luz de una perspectiva histórica y política, teniendo en cuenta dos aproximaciones: ejes jurisprudenciales transversales y categorías interpretativas.

¹ Véase STRATEGIC PRUDENCE IN THE COLOMBIAN CONSTITUTIONAL COURT, 1992-2006, by Juan Carlos Rodríguez-Raga, University of Pittsburgh, 2004 http://d-scholarship.pitt.edu/8953/1/Rodriguez-Raga_Juan_Carlos_Dissertation_07_2011.pdf

A continuación, se explicará en qué consiste esta metodología con sus respectivos referentes teóricos, pues sirve como punto de partida para desarrollar el problema de investigación aquí planteado.

1.1. Metodología para el análisis de las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia desde la politización de su jurisprudencia

El realismo jurídico norteamericano surge como el resultado de la crítica a los modelos tradicionales de concebir el derecho, es por eso que, para lo promotores de esta corriente, el derecho se debe estudiar a la luz de las realidades sociales, económicas y políticas que afronta el operador judicial al momento de aplicar la norma. El Juez Oliver Holmes, catalogado como uno de los fundadores de esta corriente, a partir de las posiciones planteadas durante su carrera judicial estableció que "cuando se estudia la norma jurídica, mira al pasado, a la historia, lo hace visualizando la historia solo como herramienta a ser utilizada en la construcción de la sociedad futura" (Portela Valentín, 2015, pág. 469).

Para los realistas, esto no quiere decir que los jueces tomen decisiones de manera arbitraria, ellos asumen que de acuerdo con su perfil académico y las expectativas profesionales y sociales, tanto el sistema, como la comunidad en general les imponen que se profieran decisiones razonables (Portela Valentín, 2015, pág. 473).

Pese a ello, Holmes era consciente de que la decisión judicial emana de la voluntad personal de quien la toma, mientras que la justificación que se muestra a la comunidad, simplemente se adecúa a dicha voluntad. "Para el Juez Oliver Wendell Holmes, Jr. esta era la manera en que los Jueces ofrecían al público una imagen de certeza que solo pretendía esconder una decisión de política pública" (Portela Valentín, 2015, pág. 474).

En efecto, el legado de Holmes reveló su criterio acerca de la subjetividad de la decisión judicial. Subjetividad que a su juicio se encontraba atada a las cuestiones políticas que encerraban cada caso en concreto, de esta manera afirmó:

"When the question of policy is faced it will be seen to be one which cannot be answered by generalities, but must be determined by the particular character of the case, even if everybody agrees what the answer should be . . . plainly the worth of the result, or the gain from allowing the act to be done, has to be compared with the loss it inflicts. Therefore the conclusion will vary, and will depend on different reasons according to the nature of the affair." (Novick, 1995, pág. 373)

En esa misma línea, según Duncan Kennedy, Learned Hand que se veía a sí mismo como un devoto seguidor de Holmes y Hohfeld, propuso el test del balanceo, pues lo veía como un reconocimiento formal de que los jueces deciden cuestiones de política pública sin ninguna metodología que los distinga de los legisladores (Kennedy, 2002, pág. 69).

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que esta corriente de pensamiento cambia todo formalismo que se hubiere podido trabajar hasta entonces sobre la actividad judicial, bajo su criterio es impensable que un fallador abandone su forma introspectiva de ver la vida. Por eso Kennedy, en la crítica de los derechos en los Critical Legal Studies afirmó:

"Uno abandona la estrategia de la negación del elemento ideológico, subjetivo, político o simplemente fortuito en el razonamiento jurídico. Uno abandona la convención según la cual los resultados son la consecuencia de la "mera" observancia del deber de fidelidad interpretativa" (Kennedy, 2002, pág. 59).

Esta corriente de pensamiento ha sido desarrollada por varios autores latinoamericanos. En ese sentir, el profesor Cesar Rodríguez comentó los aportes de Kennedy en la *libertad y restricción en la decisión judicial: una fenomenología crítica*, ratificando que en la visión crítica de la toma de decisiones se invierte el silogismo, al punto que la decisión más atractiva para el fallador es la que determina la selección de las premisas y no al inverso. Es por ello que el

profesor Rodríguez señala que "la adjudicación es un escenario donde se presenta con frecuencia una tensión entre la sentencia a la que el juez quiere llegar y lo que el derecho parece indicar, por lo menos a primera vista." (Rodríguez, 1999, pág. 81)

Por su parte, Diego López Medina ha resaltado en varias publicaciones la relevancia en trascender en la enseñanza del derecho, del normativismo puro hacia procesos de investigación más complejos que permitan descubrir las fuentes reales del derecho. Según López Medina, aun cuando el normativismo es aparentemente más neutral en la aplicación normativa, produce un déficit de conocimiento que pone a los abogados en desventaja frente a las nuevas élites profesionales en la evolución del Estado y su derecho. Por consiguiente, esa situación de ignorancia en que voluntariamente ha decidido entrar el jurista, le impide escoger entre opciones políticas alternativas, que como se dijo, en lugar de generar un plus, resulta un "vicio porque las normas, de hecho, solo son íntegramente interpretables a partir de los objetivos y metas políticas que en ellas se traslucen" (López Medina, 2006, pág. 6).

De esta manera, el profesor López de antaño ha impulsado la investigación jurídica desde la realidad de los acontecimientos que enmarcan los juicios interpretativos de la actividad judicial y sugiere:

"como alternativa al normativismo los abogados tienen varias opciones de investigación. Entre ellas y para efectos del presente texto tan solo delinearé una de ellas: la investigación jurídica, cuando resulte pertinente, puede tratar de describir los marcos más amplios (los "diálogos sociales") en los que las normas positivas se insertan y adquieren pleno sentido. en ese orden de ideas el presente texto comparte el esfuerzo de muchos juristas por vincular el desarrollo del mapa orgánico del estado con acontecimientos políticos y económicos por fuera del derecho. Las normas jurídicas no se auto-explican, especialmente cuando son el claro resultado de causas y presiones provenientes de otros sub- sistemas sociales." (López Medina, 2006, pág. 6)

En ese mismo sentido, a juicio del profesor Jorge González Jácome la práctica judicial en Colombia ha demostrado que los jueces luchan por su legitimidad política, y a través de sus decisiones se ayudan a sostener su estatus político. No solo a partir de la Constitución de 1991 se evidencia el sesgo de los magistrados de las altas cortes en sus pronunciamientos, pues de antaño, la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus facultades constitucionales también tomó decisiones que mostraron las corrientes filosóficas que gobernaban su criterio. Según González Jácome "en Colombia las altas cortes no solamente han aplicado la ley, la Constitución o en general las fuentes formales del derecho: también han tenido unos debates en torno a la citación de fuentes doctrinales que dejan ver su sesgo ideológico." (González, 2006, pág. 278)

Es por todo lo anterior que resulta indispensable destacar uno de los primeros estudios integrales sobre la Corte Constitucional de Colombia, expuesto por el profesor Juan Carlos Rodríguez-Raga, quien estudió el comportamiento de la Corte en ejercicio del control de constitucionalidad durante el periodo comprendido entre 1992 y 2006 -conocida por su activismo judicial-, a través de una metodología que mezcló la evidencia cualitativa, derivada de los artículos de prensa y la entrevista con ex magistrados y funcionarios judiciales; con el análisis cuantitativo de los casos.

En definitiva, el estudio del contexto histórico en que se profiere una decisión judicial es indispensable para comprender su sentido, pero no es el único criterio que se debe atender. Cajas Sarria manifiesta que los teóricos del derecho, la política y la historia, que escogen la Corte Suprema de los Estados Unidos como objeto de investigación suelen tener en consideración la dimensión temporal del *Judicial Review* (control constitucional).

El autor de citas atribuye esa elección bien, porque importa mucho el momento en que se produjo una decisión o porque resulta relevante rastrear la doctrina del tribunal durante un

periodo determinado (Cajas, 2015, pág. 25), motivo por el cual es pertinente el estudio de tal propuesta metodológica, como se presenta a continuación.

Criterios para el análisis político de una línea jurisprudencial

Para descender al marco operacional que va a guiar este análisis, resulta imprescindible conocer las aproximaciones sobre los estudios de la jurisprudencia constitucional, desde una perspectiva más allá de lo jurídico, permitiendo identificar el rol político que asumen los tribunales constitucionales.

En primer lugar, se tiene una dimensión temporal, que se traduce en el análisis en el tiempo de las decisiones adoptadas, pues la época en que se profieren las sentencias da cuenta del sentido de las mismas.

Al estudio de la historia de la Corte le corresponde descubrir sus pronunciamientos, porque su trabajo dentro de la estructura de pesos y contrapesos es el más sombrío de todos: la deliberación de los magistrados es secreta y la estructura argumentativa es ininteligible para el común de las personas. Casi siempre es más relevante lo que la Corte dice que lo que el ejecutivo o el legislador digan, razón por la cual, el profesor Mario Cajas, tomando como referente teórico a Peter Hoffer, entiende que los jueces en su actuar están “mirando permanente la historia: la historia de la Constitución y la de los precedentes de la Corte, así para entender el rol de la Corte y de los significados de sus decisiones en el sistema político se debe situar a la corporación como un actor histórico” (Cajas, 2015, pág. 26).

Como se había anunciado, el realismo jurídico fue la corriente pionera en formular poderosas críticas al trabajo de adjudicación de la Corte Suprema. En un intento por desnudar los intereses políticos y la ideología que era inherente a la labor judicial, “muy pronto esa

postura crítica salió de las escuelas de Derecho con rumbo hacia otras disciplinas, particularmente hacia la ciencia política” (Cajas, 2015, pág. 27).

De esta idea macro, surge la necesidad de seguir explorando las líneas que se desprenden del realismo jurídico para el desarrollo de esta investigación, toda vez que los trabajos que hasta el momento se han desarrollado en el sector académico en Colombia se ocupan de teorizar acerca de la subjetividad jurídica que radica en los animales, pero no reconocen el rol político de la Corte Constitucional en la construcción del concepto de animales como seres sintientes en el país, donde en alguna medida, también han participado las otras ramas del poder.

Ahora bien, cierto es que una de las formas tradicionales de hacer historia consiste en fijar dos puntos distantes en una línea de tiempo, de cuyo recorrido se desprende el desarrollo de los fenómenos que se muestran. Sin embargo, el profesor Barreto Rozo afirma que esa forma ha sido criticada, pues reduce "su relato a una sola línea de avance que parte de un cierto punto de menor auge y luego, mediante el desarrollo de la evolución de ciertos factores, culmina en otro punto de auge mayor" (Barreto, 2011, pág. 7).

Por tal motivo, en *La Generación del Estado de Sitio*, incorporó la propuesta de la escuela de los Annales Fernand Braudel, en la que "en lugar de asumir una tendencia de descripción unilineal de los hechos, se parte de una pluralidad del tiempo histórico y social" (Barreto, 2011, pág. 8). Luego entonces, al historiador le corresponde "mensurar la movilidad y fluidez de las distintas trayectorias bajo las que se presentan" (Barreto, 2011, pág. 9) los hechos.

En ese sentido "se hace necesario acudir a otros parámetros de duración histórica, como lo son la coyuntura y el trasfondo o estructura, para contrastar y colocar en perspectiva el mundo llano de los acontecimientos históricos" (Barreto, 2011, pág. 13). La primera, es decir la

coyuntura, brinda al historiador lapsos de análisis más amplios que los acontecimientos lineales. Así mismo, el autor distingue varios tipos de coyunturas, entre ellas la coyuntura económica y la coyuntura social (Barreto, 2011, pág. 14).

Por su parte, se entiende por estructura, de acuerdo con la cita que Barreto hace de Braudel: "una organización, una coherencia, unas relaciones suficientemente fijas entre realidades y masas sociales." (Barreto, 2011, pág. 15)

Esta precisión teórica, se tendrá en cuenta como criterio fundante para el análisis de las sentencias de la Corte Constitucional que se revisarán aquí, pues el objetivo de esta investigación es mostrar los intereses en mantener la cultura taurina en el país de algunos magistrados que conforman la Corte Constitucional y de algunos actores de los otros poderes públicos, a través de las coyunturas sociales y políticas que influenciaron las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en el reconocimiento de los animales como seres sintientes.

En segundo lugar, se presenta una dimensión comportamental, donde los jueces se mueven más por las tendencias políticas y profesionales de sí mismos, que por la construcción dogmática que pueda desarrollarse de un tema específico. Es de esta manera que, se expone en la llamada *revolución del conductismo* de las ciencias sociales, la cual se afincó en la ciencia política entre las décadas de los cincuenta y los sesenta y se dedicó a estudiar los pronunciamientos de la Corte desde la toma de decisiones, "es decir, en cómo y por qué los jueces votaban: en los comportamientos judiciales de sus decisiones" (Cajas, 2015, pág. 30).

Para Cajas, "Rohde & Spaeth en su trabajo 'Supreme Court Decision Making', marcaron toda una era entre los enfoques conductistas" (Cajas, 2015, pág. 31), puesto que ellos

buscaban identificar los patrones de un modelo que “permitiera 'predecir' los votos de los jueces, a través de metodologías conductistas” (Cajas, 2015, pág. 31).

Este par de autores daban por sentado que los jueces además de ser actores políticos, también estaban apegados a sus preferencias políticas, ideologías y demás factores psicológicos. Esta aseveración dio origen a una variable del conductismo denominada 'actitudinalismo' (Cajas, 2015, pág. 31).

Según los actitudinalistas, los jueces hacen caso omiso a la doctrina del precedente, pues en sus fallos tienen preponderancia sus intereses, “es decir, que su discrecionalidad es bastante amplia para decidir y no están restringidos por el derecho. Para Rohde & Spaeth, la independencia judicial les permite a los jueces, a estos 'actores políticos', actuar dentro de muy pocos límites” (Cajas, 2015, pág. 31). En tal sentido, un estudio realizado por el profesor Everaldo Lamprea revela que desde la nominación de las ternas para elegir magistrados se atienden a criterios políticos, ideológicos y personales, lejos del formalismo apolítico" (Lamprea, 2009 pág. 9).

En síntesis, se puede establecer que la característica común al análisis conductista y actitudinalista se enfoca en las *variables internas* de la decisión judicial, sin reconocer el papel de la doctrina legal o del derecho, apuntando entre otros aspectos a decisiones políticas (Cajas, 2015, pág. 32).

Aun cuando esta dimensión es importante, se estima que está mucho más orientada hacia otras áreas del conocimiento como la psicología. De acuerdo con lo anterior, en ella se analiza la jurisprudencia desde el comportamiento individual de los jueces que participaron en la decisión, aspecto que desborda el objetivo de esta investigación.

En tercer lugar, surge una dimensión institucional como una “tendencia de cambio” (Cajas, 2015, pág. 32). Bajo esta dimensión, denominada neoinstitucionalismo, se propone

revisar a los jueces de manera individual, el ambiente institucional en que se desempeñan y su interacción con otras instituciones. Por consiguiente, se engrana los pronunciamientos tanto de la rama judicial, como los de las otras ramas del poder. El profesor Cajas resalta que, para los neoinstitucionalistas “los jueces no solo crean política ni únicamente están sometidos a sus preferencias ideológicas”, pues las decisiones que se adoptan, están enmarcadas en un amplio ambiente político que influye en sus decisiones (Cajas, 2015, pág. 32).

Según el autor de citas, los neoinstitucionalistas tienen varias formas de aproximarse al trabajo de la Corte, empero, él destaca al menos dos variantes: el neoinstitucionalismo del *rational choice* y el histórico, que se explica en breves líneas a continuación.

Los neoinstitucionalistas del *rational choice*, inducen a que la atención se centre en el clima institucional como epicentro del análisis y no en el juez como persona que adopta un fallo. Para Cajas, los precursores de esta variante sostienen que los jueces actúan estratégicamente, pues son conscientes de su actuar.

De esa manera, “estiman que las restricciones son tanto las impuestas por otros actores, como por las demás instituciones y por el contexto institucional” (Cajas, 2015, pág. 33). Es decir, los neoinstitucionalistas del *rational choice* “conciben las decisiones judiciales como el producto de la interacción y no de la reacción” (Cajas, 2015, pág. 33).

Por otro lado, se presenta el neoinstitucionalismo histórico, donde las instituciones y los actores políticos a través de la *historización*, ayudan a comprender mejor el modo en que aquellas se construyen y cómo —en mutua interdependencia— influyen a los actores políticos.

Cajas entiende que en el neoinstitucionalismo histórico “las instituciones no solo establecen restricciones a las preferencias: ellas también construyen preferencias. Esto indica que las instituciones además de ser regulativas, también son constitutivas: 'restringen las

preferencias porque estructuran incentivos, pero también moldean las preferencias a través de la influencia en las ideas” (Cajas, 2015, pág. 33).

Teniendo en cuenta lo anterior, para identificar el rol político de la Corte Constitucional de Colombia frente al reconocimiento de los animales como seres sintientes, resulta necesario estudiar sus pronunciamientos sobre de la protección de los animales, en el contexto interinstitucional que se ha desarrollado por más de 10 años, pues tal reconocimiento ha sido producto de la interacción entre las distintas ramas del poder público, a partir de la intervención de la Corte Constitucional en el ejercicio del control de constitucionalidad.

1.2. La administración de justicia. Entre la judicialización de la política y la politización de la justicia

En el desarrollo de la función jurisdiccional en cabeza de los jueces “hay interés en lo que se denomina la dicotomía judicialización de la política y en la politización de la justicia” (Cajas, 2015, pág. 41). La primera de ellas, se entiende como el dominio que la política ejerce sobre la estructuración del órgano judicial; y la segunda, como el traspaso de la frontera que el poder judicial hace frente a las decisiones de carácter político, que en principio deberían adoptar el legislativo y el ejecutivo por ser los órganos legitimados democráticamente (Ansolabehere, 2005, pág. 40).

En tal sentido, el profesor Lamprea considera que eso ha conllevado a que las cortes constitucionales capten la atención de la opinión pública, que al comparar la independencia judicial con la rendición de cuentas “que, según Ginsburg y Garoupa, buscan alcanzar los sistemas de nominación de altas cortes, es puesto a prueba cuando una corte —como la corte constitucional colombiana— se ha perfilado como un jugador político de peso.” (Lamprea, 2009, pág. 6).

Por otro lado, en lo que concierne a este estudio, se ha indicado que el reconocimiento de los animales como seres sintientes en Colombia nació de la interacción de las distintas ramas del poder público, tomando como punto de partida las sentencias de la Corte Constitucional en sede de control de constitucionalidad, es decir que la Corte, a través de sus pronunciamientos ha doblegado la voluntad del legislador, elegido democráticamente para tales fines, traspasando la frontera del poder judicial.

Por ello, para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación, se debe centrar en el concepto de politización de la justicia que se refiere al cambio en el quehacer del ramo judicial: “a) la de guardián de la constitución frente a las decisiones políticas, b) la de árbitro en conflictos en torno a los alcances y límites del poder político y c) la de fiscalización de la tarea de los políticos” (Ansolabehere, 2005, pág. 41).

En resumen, el poder judicial se sobrepone a las decisiones del ejecutivo y del legislativo. Ansolabehere considera que la politización de la justicia supone la amplificación del poder judicial en ejercicio de control de constitucionalidad.

Particularmente, la autora de citas señala que en la medida que pasa el tiempo, el poder judicial trastoca áreas de la vida social que quedan excluidas de la decisión política, “mientras durante el siglo XIX y ya entrado el siglo XX, el poder judicial se caracterizaba por la tutela casi exclusiva de los derechos de propiedad”, posteriormente se dio un giro hacia la defensa de los derechos civiles, sociales y políticos, más adelante de género y ambientales, entre otros (Ansolabehere, 2005, pág. 41).

Para justificar este punto, como resultado de la observación al comportamiento de los regímenes judiciales en Argentina y México, (Ansolabehere, 2005) concluyó que:

Existen dos modelos diferenciados de posicionamiento frente a la politización de la justicia en uno y otro caso. Un modelo en el que encaja la Corte Suprema de Justicia

de la Argentina le denominó de árbitro prudente, porque tiende a problematizar y a definir los límites de sus funciones; mientras que a la Suprema Corte de Justicia Mexicana la encuadró en el que denominó de árbitro asumido, pues no se observa una expresa preocupación por definir los límites de su función (p. 45).

El esquema de un árbitro asumido, como lo ha denominado la autora, permite descubrir el rol político que ejerce una determinada corporación en ejercicio del control de constitucionalidad.

Hasta aquí, los resultados que muestran los estudios de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América y países latinoamericanos como México y Chile, entre otros, son iguales a lo que ha venido ocurriendo en Colombia. Razón por la cual, para identificar los roles marcados, resulta indispensable conocer la trayectoria de las decisiones adoptadas por la corporación sobre la que recae la investigación.

No obstante lo anterior, para la consecución de esos fines investigativos, cabe destacar que en otros países cuentan con las fuentes y la comunidad académica suficiente que en ese contexto se ocupa de la historia judicial o del análisis; por ejemplo, de la Corte Suprema de los Estados Unidos donde existen numerosos archivos, fondos documentales e información (Cajas, 2015, pág. 38). Razón por la que el profesor Cajas destaca las metodologías para rastrear las historias sobre las cortes, pero reconoce que son investigaciones desarrolladas en otros contextos, “que sirven de marco a las aproximaciones a las cortes supremas en otras experiencias” (Cajas, 2015, pág. 42).

De acuerdo a lo anterior, se analizarán las transformaciones constitucionales desde una perspectiva autóctona, a la luz del contexto académico y judicial colombiano. Con todo, se reconocerán esos cambios "como producto de la interrelación entre 'variables internas' (doctrinas, precedentes, ideologías, estrategias, etc.), y 'variables externas' (contexto político, ambientes institucionales, etc.)" (Cajas, 2015, pág. 42), con el fin de “dar cuenta del control

constitucional desde esa jurisprudencia, pero atendiendo al rol político de la corporación” (Cajas, 2015, pág. 42).

De lo anterior se infiere que, existen casos marcados en los que la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad funge como un actor político diferente al congreso o al ejecutivo, pues como lo indica el profesor Cajas, “mientras estos órganos son elegidos democráticamente, la legitimidad del tribunal descansa sobre su jurisprudencia” (Cajas, 2015, pág. 43). Ahora bien, para determinar el rol político de la Corte Constitucional de Colombia durante el reconocimiento de los animales como seres sintientes, se estudiarán las sentencias en contexto proferidas en sede de control constitucional, en un ambiente institucional propio.

Para obtener este resultado, se abordará el planteamiento de Cajas acerca de una narrativa de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en ejercicio del control constitucional basado en: (i) períodos, (ii) claves de entrada a la jurisprudencia o ejes jurisprudenciales transversales, y, (iii) categorías interpretativas, que se divide en doctrinas jurídicas y contextos políticos, metodología que se ha considerado acertada.

En primera instancia, es importante resaltar que históricamente en Colombia no se ha documentado de forma significativa sobre el rol político de los tribunales constitucionales, por lo tanto, no se puede hablar de periodos compartidos por la comunidad académica. Las periodizaciones del constitucionalismo colombiano, que suelen narrarse desde una perspectiva cronológica, lineal o evolutiva de los cambios en los textos constitucionales, no resultan idóneas para establecer el objetivo principal en este tipo de investigaciones, pues no dan cuenta de las variables externas que se pueden generar en el desarrollo de las decisiones que se toman (Cajas, 2015, pág. 44).

Teniendo en cuenta lo anterior, Cajas propuso otro tipo de periodización, “que más bien obedece a la conjunción de las distintas herramientas metodológicas con que rastreamos la justicia constitucional de la Corte Suprema” (Cajas, 2015, pág. 45). Por consiguiente, los periodos de tiempo expuestos bajo este criterio no obedecen a una evolución cronológica de la jurisprudencia, sino que se adoptan de acuerdo con la relevancia otorgada por el eje jurisprudencial seleccionado.

La delimitación temporal del problema abordado, abarca el periodo comprendido entre los años 1989 y 2017. Es decir, inicia con la expedición del Estatuto Nacional de Protección Animal, en cuyo articulado se exceptúan de dicha protección las prácticas de rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos.

Lo anterior produjo desde el año 2005, luego de la expedición del Reglamento Nacional Taurino- RNT (Ley 916 de 2004), una serie de pronunciamientos de la Corte Constitucional, donde ésta, inicialmente avaló la excepción a la protección animal en unos casos muy especiales, y culmina en el 2017 cuando la Corte Constitucional cambió el sentido de su jurisprudencia, declarando la inexecutable de la excepción a la penalización de la protección animal en esos casos, diferida por el término de dos años, y exhortando al Congreso a moderar las prácticas donde se maltratan animales en ese lapso, so pena de cobrar fuerza ejecutoria la declaratoria de inexecutable de la excepción anotada.

Ahora bien, en el mismo sentido que lo expone el profesor Cajas, se reconoce la categoría *tiempo*, entendida como periodos de una trayectoria. Esos periodos obedecen a características del contexto político y de la doctrina legal. Es así que no se trata de periodos concebidos como una natural evolución doctrinal o política que marca el desarrollo de la

corporación (Cajas, 2015, pág. 45). Por consiguiente, se considera imperioso estructurar así estos periodos si se quiere mostrar las diversas causas del cambio institucional, de las distintas facetas del control constitucional y de los diferentes momentos históricos (Cajas, 2015, pág. 46).

Por otro lado, se encuentran los ejes jurisprudenciales transversales, entendidos como aquellas sentencias relevantes, sobre temas que comportan en mayor grado el rol político de la corporación a través del tiempo (Cajas, 2015, p. 47).

Para esta investigación, no resultó complejo identificar el eje jurisprudencial, toda vez que han sido muy pocos los pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia sobre la protección de los animales. En este caso, se cuentan ocho sentencias de constitucionalidad, de las cuales, una estudia la prohibición relativizada de los vehículos de tracción animal del Código Nacional de Tránsito Terrestre; en cinco se revisa particularmente la constitucionalidad del Estatuto de Protección Animal y el Reglamento Nacional Taurino, en donde la Corte muestra una evolución paulatina sobre el concepto de animales como seres sintientes; en otra se avala la prohibición de animales en circos; y en la última, proferida en el año 2017, la Corte durante el estudio de la Ley 1774 de 2016 (donde se mantuvo la excepción a la protección animal sobre las corridas de toros, novilladas, etc.), le dio un giro al sentido de sus fallos anteriores, declarando inexecutable la excepción a la protección animal de las corridas de toros, las novilladas, entre otros; y exhortó al congreso a moderar las festividades donde se maltratan animales en el lapso de dos años, so pena de cobrar fuerza ejecutoria la declaratoria de inexecutable en la excepción anotada.

Finalmente, se encuentran las categorías interpretativas, entendidas como las doctrinas jurídicas y/o restricciones bajo las cuales actúa la Corte, tales como los materiales jurídicos, los

contenidos del texto constitucional, las disposiciones legales, las doctrinas sobre el derecho constitucional, el precedente jurisprudencial o la interpretación jurídica y los contextos políticos o ambientes institucionales que aparecen en esa trayectoria (Cajas, 2015, pág. 54).

En cuanto a las categorías interpretativas que van a guiar el análisis de las sentencias, se reconoce que la simple lectura de las consideraciones y la parte resolutive de las sentencias no son suficientes para un análisis de tipo académico, por consiguiente, se deben descubrir los expedientes a través de los cuales se evidencia el juego de intereses generado en torno al problema debatido.

Por esta razón, no puede existir dedicación exclusiva (de estudio) a las decisiones de la mayoría de la Corte en determinado momento, sino que resulta indispensable escudriñar en las opiniones disidentes, expuestas en las aclaraciones y salvamentos de voto.

Lo anterior reviste gran importancia, por lo que permite poner en evidencia cómo la doctrina desarrollada por las opiniones minoritarias durante el periodo de una trayectoria y una coyuntura específica cobra fuerza, e inclusive, pasa a convertirse en la postura triunfante de la Corte en otro momento de esa misma trayectoria, “y no pocas veces en un sentido no previsto por quien inicialmente invocó o formuló tal doctrina” (Cajas, 2015, pág. 50).

Al respecto, Tushnet ha puesto de presente la importancia de las opiniones disidentes en la trayectoria jurisprudencial constitucional de la Corte Suprema de los Estados Unidos, así como se encuentra citado por Cajas Sarria (2015):

Estas sirven para comprender la historia judicial; para abordar discusiones sobre temas constitucionales recientes como la “retórica del disentimiento” a través del tiempo; para identificar los “grandes disidentes” o aquellos magistrados que con su opinión minoritaria jugaron un rol importante en varios momentos y sobre diversos temas del debate doctrinal de la Corte; y para entender la “doctrina legal como precedente”. También destaca cómo muchas opiniones minoritarias que con el tiempo se van convirtiendo en la decisión mayoritaria de la Corte son el producto de un complejo proceso social y político, de modo que analizar la manera gradual en que las

opiniones minoritarias se van convirtiendo en precedente “es uno de los mejores modos para apreciar las conexiones entre el derecho constitucional resultantes de la interdependencia entre derecho, economía, política y en general de la sociedad (Pág. 50).

En consecuencia, en este trabajo se analizarán los salvamentos de voto que den cuenta de la realidad social, económica y política que determina las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional de Colombia, durante el control de constitucionalidad del Estatuto de Protección Animal y del Reglamento Nacional Taurino, entre otros. A través de las cuales, se construyó de manera paulatina el concepto de animales como seres sintientes en Colombia.

Así mismo, se revisarán las reacciones que esos pronunciamientos generaron en el Congreso y; las reacciones que evidencien tal situación en textos académicos, de opinión y en medios de comunicación, tal como lo hizo el profesor Cajas en su narrativa de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

De esta manera, la interacción entre las categorías interpretativas y los ejes jurisprudenciales transversales entretejen los periodos y permiten rastrear la trayectoria de la Corte y del control constitucional colombiano, en el reconocimiento de los animales como seres sintientes (Cajas, 2015, pág. 54).

No obstante, "el costo de admitir, revelar o hacer públicos estos criterios “escondidos” o “sumergidos” es demasiado alto en un sistema como el colombiano, todavía altamente formalista y basado en un modelo de juez que falla únicamente con base en la ley" (Lamprea, 2009 pág. 9).

Habiendo definido el marco operacional reflejado en la metodología para el análisis de las sentencias², la ruta de esta investigación es la que se menciona a continuación. En primer

² Las técnicas de análisis estático de sentencias han florecido mayoritariamente en el contexto de discusiones sobre la vinculatoriedad del auto-precedente en sentencias de constitucionalidad (tipo C-). Esto es: la aplicación consistente de las distinciones entre ratio y dicta, por un lado, y cosa juzgada explícita, implícita y aparente, por el otro, se han dado en discusiones de alto contenido político al interior de la Corte donde alas enfrentadas esperan

lugar, se establecerá el mecanismo que utiliza la Corte Constitucional para interactuar con las otras ramas del poder y luego; se analizará el contexto en que fueron proferidas las sentencias en la construcción del concepto de animales como seres sintientes, a partir de las reacciones generadas en las demás ramas del poder público.

1.3. La modulación de sentencias como alternativa

Al proponer la interrelación entre “*variables internas* (doctrinas, precedentes, ideologías, estrategias, etc.), y *variables externas* (contexto político, ambientes institucionales, etc.)” (Cajas, 2015, pág. 42), se produce una interacción entre el tribunal constitucional y las otras ramas del poder público, que suponen la aplicación de una técnica de legitimación que se presenta como la modulación de sentencias.

La modulación de sentencias se define como: la técnica generalmente usada en la instancia del control de constitucionalidad, la cual sirve para establecer el sentido o los sentidos en los que se debe entender una disposición o enunciado, y con ello, poder determinar las normas obtenidas directa o indirectamente de la misma, que estén acordes o no con la Constitución (Escobar, 2006, pág. 92).

En ese sentido, para comprender el significado e importancia de la técnica de modulación de sentencias, se debe diferenciar entre *disposición* y *norma*: por la primera, se entiende cualquier enunciado que forma parte de un documento normativo, es decir, el conjunto de palabras que conforman una o varias frases en la que se expresa un significado normativo. Por la segunda, el ejercicio interpretativo del juez que atribuye sentido a una disposición (Sarmiento, 2012, pág. 291).

poder restringir el razonamiento de la otra mediante referencia a la vinculatoriedad del precedente (Lopez, 2001, pág. 122).

No obstante, bajo el esquema de la politización de la justicia, existen casos en los que el tribunal constitucional se abstiene de decidir y/o pone de presente una Corte vacilante. En estos eventos, se le traslada la carga al legislador, como ocurre con las sentencias de inadmisibilidad y de recomendación al legislador, entre otras tipologías de sentencias moduladas, como se verá más adelante.

Ahora bien, en Colombia, el control de constitucionalidad no es una práctica que nació con la Constitución de 1991. De antaño, la Corte Suprema de Justicia tenía la función de velar por el respeto del texto constitucional entonces vigente, en cuyo ejercicio se aplicaban diversas técnicas para modular sus fallos (Escobar, 2007, pág. 296). Cosa distinta es que aquí, el trabajo se refiera a los esfuerzos realizados por la Corte Constitucional de Colombia, porque fue ella, la que asumió un rol específico en el debate en torno al reconocimiento de los animales como seres sintientes en Colombia, a partir de su misma jurisprudencia.

De acuerdo a lo anterior, es necesario hacer una precisión: la modulación de sentencias como técnica utilizada por los tribunales constitucionales para la adopción de fallos, no implica por sí misma una decisión política. La hipótesis de esta investigación supone que, al modular las sentencias, la Corte puede aprovechar la oportunidad política para articular una decisión, es decir, que une estas dos perspectivas, afirmando que la modulación de sentencias como técnica para la interpretación normativa, generalmente usada en sede del control de constitucionalidad, ha sido el mecanismo utilizado por la Corte Constitucional para reconocer a los animales como seres sintientes en Colombia.

1.3.1. Legitimación de la jurisprudencia como fuente de decisiones políticas.

Conforme a los planteamientos iusfilosóficos, en el marco de la corriente que sirve de base para esta investigación, se ha indicado que la Corte es un órgano judicial y a la vez un actor político.

Pero se trata de un actor político diferente del Congreso o del Ejecutivo, pues a diferencia de esos órganos elegidos democráticamente, la legitimidad del tribunal descansa sobre su jurisprudencia (Cajas, 2015, pág. 43).

En ese sentido, el juez también hace parte de la consolidación de un orden liberal o totalitario que media entre los derechos de las personas y las prerrogativas del Estado. La legitimidad que ofrece la jurisprudencia responde en ocasiones a intereses entrecruzados de quienes ostentan el poder. Sarmiento concluye que “para Lochak la decisión de la justicia responde, las más de las veces, a decisiones políticas que se hacen menos visibles cuando van en la dirección de la opinión prevaleciente” (Sarmiento, 2012, pág. 286).

Cabe resaltar que la visibilidad del derecho de los jueces se encuentra íntimamente ligada al sentido de la opinión prevaleciente. En otras palabras, si la decisión judicial sigue el mismo sentido que la opinión prevaleciente, no se hará tan visible como aquella que la contraría.

En efecto, el reconocimiento de los animales como seres sintientes en Colombia es un concepto que, de hecho, se presentó en contravía de las prácticas culturales arraigadas en algunos sectores de la sociedad colombiana consentidas por el legislador, lo que hacía que el contenido de las sentencias de la Corte fueran mucho más visibles.

Luego entonces, el contexto sí influye en la interpretación que el juez hace de un enunciado cuando este presenta varias alternativas, de tal suerte, que el juez toma en consideración aquella que sea de su propia elaboración, sin manifestar los motivos que lo llevaron a esa determinación.

Sarmiento entiende que, de acuerdo con el aporte de Lochak, tras el razonamiento de los jueces existe una oportunidad política que está en juego, incluso es posible probar que “el juez

recurre a principios constitucionales que tienen como resultado habilitar jurídicamente una situación ilegal o antijurídica” (Sarmiento, 2012, pág. 286).

A similares conclusiones llegó Lisa Hilbink, en su obra denominada: *Jueces y política en democracia y dictadura. Lecciones desde Chile*, al establecer que “La ideología y la estructura institucional de la judicatura chilena, construidas históricamente alrededor de la noción de 'apoliticismo', entregan una concepción del rol político que dejan incluso a los jueces de mayor convicción democrática sin herramientas para –y poco inclinados a- tomar posición en defensa de los principios democrático-liberales” (Hilbink, 2014, pág. 22).

Se entiende que los pronunciamientos de los jueces, en el marco de las relaciones institucionales no obedecen a la preservación de los derechos, sino al ejercicio político que experimentan desde la administración de justicia. Según el caso chileno expuesto por Hilbink (2014):

En vez de invocar los derechos y garantías individuales o la estructura democrático-liberal de la Constitución para limitar los abusos de poder por parte del Estado y promover la igualdad ante la ley, los jueces chilenos, algunos activamente, y la mayoría pasivamente, expidieron decisiones que sustentaron el poder de los funcionarios del Estado y reforzaron la jerarquía social tradicional desde mucho tiempo antes, y hasta mucho después, de los diecisiete años de dictadura. (Pág. 22)

De acuerdo a lo anterior, es posible inferir que la experiencia de la actividad judicial demostró, en los casos norteamericano, francés y latinoamericano, haber optado por aprovechar esa oportunidad para articular decisiones políticas de acuerdo con las necesidades, valga la redundancia, políticas del momento en que se ejerce.

Siendo así, se puede afirmar que los jueces legitiman su jurisprudencia como fuente formal de derecho a partir de la intromisión de estos sobre las otras ramas del poder público, desbordando sus facultades de administrar justicia al traspasar el límite de lo jurídico,

intromisión que se consolida a partir de la ideología y la estructura institucional, y no a partir de la invocación de los derechos y garantías individuales, ni de la estructura democrático-liberal de la Constitución, para limitar los abusos de poder por parte del Estado y promover la igualdad ante la ley.

Esos pronunciamientos de los jueces, en el marco de las relaciones institucionales, no obedecen a la preservación de los derechos, sino al ejercicio político que experimentan desde la coerción de la administración de justicia (Hilbink, 2014, pág. 49).

Pero se insiste en que, para lograr lo anterior, el tribunal constitucional debe acudir a recursos propios, que en su actuar legítimo le permitan traspasar las barreras de su ramo, tal como la modulación de sus fallos.

En ese sentido, parafraseando al profesor Cajas, se concibe a la Corte Constitucional como un juez que tomó decisiones -o dejó de tomarlas- en determinados ambientes institucionales y coyunturas políticas. Así mismo, ha venido actuando bajo un esquema interno (los magistrados, sus estrategias) y externo (las presiones de las otras ramas del poder público, las audiencias: partidos políticos, opinión pública, en nuestro caso las agremiaciones), y, por supuesto, de las doctrinas jurídicas (Cajas, 2015, pág. 43).

Así las cosas, reafirmamos que la Corte es un órgano judicial y a la vez un actor político, pero un actor político diferente al Congreso o el Ejecutivo, pues, a diferencia de esos órganos elegidos democráticamente, la legitimidad del tribunal descansa sobre su jurisprudencia (Cajas, 2015, pág. 43).

Por lo anterior, en este documento se analizan en contexto los fallos de la Corte Constitucional de Colombia proferidos en el marco de la protección de los derechos de los animales, producto de la solicitud de inconstitucionalidad del Estatuto Nacional de Protección

Animal y, del Reglamento Nacional Taurino, en donde por regla general, se prohíbe el maltrato animal exceptuando las novilladas, corralejas, corridas de toros, pelea de gallos, entre otros, a la luz de las técnicas de modulación utilizadas. Lo anterior como estrategia para reconocer de manera paulatina, a los animales como seres sintientes en Colombia, haciendo énfasis en el contexto en que se expidieron.

1.3.2. Precisiones teóricas en torno a la modulación de sentencias. Ahora bien, para demostrar la hipótesis acerca de la oportunidad que la Corte Constitucional utiliza para articular decisiones políticas a través de la modulación de sus fallos, resulta imprescindible hacer algunas precisiones teóricas en torno a esta técnica jurisprudencial.

Sea lo primero advertir que la modulación de sentencias es utilizada en el continente europeo por lo menos desde el año 1925. Sin embargo, la primera noticia que se tiene del uso de esta técnica data del siglo XIX por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo cual comprueba que su uso no depende de la existencia de un determinado tipo de control constitucional (concentrado o difuso) o de la creación de un Tribunal Constitucional independiente del poder judicial (Escobar, 2006, pág. 92).

Como se había mencionado, no es cierto que la modulación de sentencias condicionadas en Colombia sea creación de la Corte Constitucional. Toda vez que dicha técnica, ha sido también “utilizada por la Corte Suprema de Justicia desde el año 1912 y por el Consejo de Estado colombiano desde 1947 en los casos de las acciones de inconstitucionalidad y de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad respectivamente” (Escobar, 2006, pág. 93)

Eso quiere decir que en varios países del mundo, desde mucho tiempo atrás, la práctica de esta técnica ha sido muy común. En tanto, no importa la denominación que se les asigne a estos fallos, ya que independientemente de ello, en todos los eventos presenciamos una

sentencia en la cual el órgano que la dicta, despliega un ejercicio interpretativo sobre la “disposición enjuiciada que lo hace conforme con la constitución o elimina una norma derivada de la disposición por considerarla contraria a la Constitución” (Escobar, 2006, pág. 93) .

En ese mismo sentido, el profesor Juan Pablo Sarmiento, bajo la cita del profesor Aragón Reyes, pone de presente en el 2010 que:

Las razones en las que se basan las sentencias moduladas son dos: las primeras son llamadas razones constitucionales, entre las que se encuentran el carácter abierto de las cláusulas constitucionales, la obligación misma de interpretar de conformidad con la Carta Fundamental todo el ordenamiento, la observancia del pluralismo y el respeto al legislador democrático, que conducen a la presunción de constitucionalidad de la disposición salvo prueba en contrario, y a evitar, en consecuencia, su anulación, mientras puede hallarse una interpretación conforme. Las segundas son las razones ordinamentales, las cuales se refieren a la seguridad jurídica, lo que implica evitar en lo posible la producción de lagunas, defender el principio de conservación de la ley siempre que la contradicción con la Carta no sea completamente evidente. (págs. 233-234)

Recogiendo lo anterior, se ratifica que los tribunales constitucionales en sede de control de constitucionalidad, interfieren en la producción normativa, desechando la visión clásica según la cual esta función estaba reservada exclusivamente para el legislador. En síntesis, la técnica de la modulación de sentencias se resume como “aquellos fallos del Tribunal Constitucional que traen en sí mismo normas” (Sarmiento, 2010, pág. 233).

Dicho esto, es importante recordar que, al hablar de interrelación de variables internas y externas, se produce una interacción entre el tribunal constitucional y las otras ramas del poder público, que surge de la modulación de sus fallos. Sin embargo, la modulación de sentencias, como técnica utilizada por los tribunales constitucionales para la adopción de fallos, no implica por sí misma una decisión política.

En este orden de ideas, se entiende que toda interacción del tribunal constitucional como producto de su rol político le impone modular sus fallos, pero no toda modulación significa una decisión política.

Ahora bien, durante el ejercicio interpretativo que han venido desarrollando los tribunales constitucionales en sus sentencias, principalmente en Italia, han surgido diversos tipos de sentencias (Escobar, 2006, pág. 78). Así pues, la profesora Lina Escobar (2006), citando a Francisco Esquiaba, establece que:

En primer lugar es necesario tener presente que “todas las decisiones del Tribunal Constitucional (e incluso todas las decisiones judiciales) son interpretativas en la medida en que, para resolver conflictos utilizando el derecho como instrumento (y en esta función coincide el Tribunal Constitucional con todo el poder judicial), es imprescindible aplicar enunciados legales, operación que exige necesariamente, atribuir a esos enunciados un significado, o lo que es lo mismo, determinar una norma a partir de los mismos” (pág. 78).

En segundo lugar, la autora de citas plantea que es necesario tener en cuenta que en las sentencias de los tribunales constitucionales es frecuente encontrar declaraciones interpretativas en la motivación de la decisión (en sus fundamentos jurídicos), sin reflejo luego en el fallo de la misma. En este caso, se hace alusión a las concretas atribuciones de significado a enunciados cuya constitucionalidad se cuestiona, precisamente para hacerlos compatibles con la Constitución y mantenerlos en el ordenamiento jurídico, aunque sin referencia posterior en el fallo de la decisión a los mismos (pág. 79).

Como resultado de esa función jurisdiccional, surgen las sentencias interpretativas. Según la profesora Escobar, por referencia de Javier Pérez Royo, las entiende como aquellas en las que los tribunales constitucionales no solo declaran la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada, sino que también excluyen algunas de las interpretaciones posibles o de todas las posibles escogen una, que es la que se declara conforme a la constitución (Escobar, 2006, pág. 80)

Es por ello que, “frecuentemente se considera por definición, que las sentencias interpretativas deben ser siempre sentencias desestimatorias” (Escobar, 2006, pág. 80). A pesar de lo anterior, no siempre es así, pues la estimación o desestimación de la acción de inconstitucionalidad, lleva consigo la inconstitucionalidad o la conformidad con la Constitución de disposiciones.

No obstante, cuando se trata de sentencias interpretativas, el objeto de la declaración de constitucionalidad son las normas. En éstas, parece mejor hablar de declaraciones de inconstitucionalidad de normas o de declaraciones de conformidad con la Constitución de normas, ya que primero: ambos tipos de pronunciamientos no anulan la disposición y, segundo: “ambos pueden encontrarse tanto en sentencias (aparentemente) estimatorias como desestimatorias” (Escobar, 2006, pág. 81).

Así mismo, la experiencia de los tribunales constitucionales ha construido una serie de sentencias de este tipo, algunas veces estimatorias y otras desestimatorias. Sin embargo, en esos procesos de identificación de las normas jurídicas, los tribunales en algunos momentos se han excedido en el uso de sus atribuciones constitucionales y han llegado a *forzar* el significado de las formulaciones normativas hasta entenderlas como expresión de normas de pura creación jurisprudencial (Escobar, 2006, pág. 82), lo cual es muy evidente en las sentencias denominadas manipulativas (Escobar, 2006, pág. 82).

Dicho lo anterior, solo resta indicar que la tipología de sentencias que se presenta, ha sido complementadas por estudios de diferentes autores, entre otros, los profesores Lina Escobar y Hernán Olano, como se relaciona a continuación: (i) Modulación tradicional que se dividen en: a) Estimatorias y b) Desestimatorias; (ii) Sentencias Manipulativas que se dividen en: a) Interpretativas o Condicionales, con acogimiento o rechazo, b) Integradoras o Aditivas y c) Sustitutivas; (iii) Sentencias con efectos temporales que se dividen en: a) Ex tunc, b) Ex nunc y c) con efectos prospectivos, (iv) sentencias abstencionistas que se dividen en: a) sentencias de inadmisibilidad y b) sentencias de recomendación al legislador, y finalmente una tipología particular, denominada (v) sentencias exhortativas, las cuales serán objeto de explicación para el desarrollo de este trabajo.

1.3.2.1. Modulaci3n tradicional. Tradicionalmente las sentencias que profieren los jueces se pueden clasificar en estimatorias y desestimatorias. As3 lo explica Hern3n Olano en su art3culo denominado *Tipolog3a de nuestras sentencias constitucionales*, al manifestar que “las primeras acogen la demanda. Las segundas, no les dan raz3n. Sin embargo, este es un esquema muy elemental de comprenderlas” (Olano, 2004, p3g. 576). Por lo tanto, muchos autores se han dado a la tarea de realizar, en extenso, una clasificaci3n much3simo mas especifica de acuerdo con el contenido de cada pronunciamiento.

1.3.2.2. Sentencias Manipulativas. Por su parte, se explican las sentencias manipulativas como aquellas que van m3s all3 de un simple pronunciamiento acerca de la conformidad o no con la Constituci3n, de las normas que pueden extraerse de una disposici3n enjuiciada, pues con ellas el Tribunal Constitucional construye una nueva norma. Seg3n la profesora Lina Escobar, estas sentencias no son el resultado de la interpretaci3n, sino que “viene impuesta por la Constituci3n para conservar la validez de la disposici3n, aunque finalmente esa norma nueva es presentada como un significado de la disposici3n impugnada” (Escobar, 2006, p3gs. 82-83).

Las sentencias manipulativas surgen con la finalidad de rellenar un vac3o legislativo, generador de mayor inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional decide mantener la ley en el ordenamiento, en los eventos en que esa ley, despu3s de ser *manipulada*, pueda ser entendida conforme a la Constituci3n (Olano, 2004, p3g. 576), es decir, que la finalidad de estas sentencias es crear una nueva norma.

Para Olano, el principal argumento que justifica las sentencias manipulativas es la seguridad jur3dica y comprenden: a) las sentencias interpretativas o condicionales, b) las

integradoras o aditivas, y c) las sustitutivas (Olano, 2004, pág. 576), que se explican a continuación:

a) Las sentencias Interpretativas o Condicionales son aquellas en las que la Corte restringe el alcance normativo de la disposición acusada, limitando su aplicación y/o sus efectos. Estas sentencias desplazan una de las posibles interpretaciones, pero mantienen la eficacia normativa de la misma. Es decir, si una de las interpretaciones va contra la Constitución y la otra está conforme con ella, el Tribunal Constitucional, sólo declara la inconstitucionalidad del sentido interpretativo que colisiona con ella.

Es una sentencia manipulativa, pues luego del ejercicio interpretativo del Tribunal Constitucional, el sentido constitucionalmente admisible es alterado, siendo que probablemente no fue el querer del legislador (Olano, 2004, pág. 577).

En cuanto a las sentencias interpretativas estimativas o de acogimiento, Olano García toma las palabras de Nogueira Alcalá para advertir que “consideran inconstitucionales ciertas interpretaciones del enunciado normativo, vale decir ciertas normas que surgen de la interpretación considerada inconstitucional” (Olano, 2004, pág. 577). Quiere ello decir que se expulsa del ordenamiento jurídico aquella o aquellas interpretaciones contrarias a la constitución, aun cuando el texto de la norma permanece incólume.

Por su parte, en las interpretativas desestimativas o de rechazo, según el profesor Nogueira Alcalá, “surgen al establecer la interpretación conforme a la Constitución del enunciado normativo” (Olano, 2004, pág. 577).

Citando a Nogueira, el profesor Olano, con una apreciación mezquina, pero no alejada de la realidad establece que “esta clasificación subsiste bajo el criterio que solo

cuando una norma no tiene ninguna interpretación conforme a la Constitución, corresponde al tribunal constitucional respectivo expulsarla del ordenamiento jurídico” (Olano, 2004, pág. 578)

Esta clasificación muestra el poder que tiene un juez constitucional en sus manos, no solo para decir cuál es el sentido y lo que se debe entender de una disposición, sino también para adoptar una norma que a lo mejor fue el querer del legislador. En este orden de ideas, se presenta nuevamente el criterio del profesor Sarmiento, quien afirma que “esta tipología de sentencia se ubica en la zona lindante entre las competencias propias del tribunal constitucional y las funciones que corresponden al legislador” (Sarmiento, 2010, pág. 235).

b) En cuanto a las sentencias Integradoras o Aditivas, se dice que “la Corte no anula la disposición acusada, pero le agrega un contenido que la hace constitucional. Es decir que, se incorpora un elemento nuevo al enunciado normativo, extendiendo la norma para que asuma un supuesto de hecho no contemplado en sus inicios” (Olano, 2004, pág. 578).

En esta tipología la Corte asume el rol del legislador amparada en una exigencia constitucional, pues de no hacerlo, la inconstitucionalidad de la norma generaría un perjuicio más grave, respecto a los supuestos normativos de la disposición. Clara Vargas manifiesta que “Este tipo de sentencias es una respuesta a una inconstitucionalidad por omisión legislativa, es decir, que la regulación respectiva no prevé aspectos necesarios que debería contener para ajustarse a la Constitución” (Vargas, 2011, pág. 24).

Según el profesor Sarmiento, las sentencias aditivas buscan transformar el significado de la ley bajo estudio, para evitar su eliminación o su interpretación conforme con la constitución. En ese sentido, sostiene que “las Cortes constitucionales desarrollan una

función mediadora de conflictos sociales y políticos, por lo que las sentencias normativas o manipulativas aparecen como instrumentos procesales necesarios para el desarrollo de tales fines” (Sarmiento, 2010, págs. 234-235).

Bajo este supuesto, el juez constitucional desdobra su función jurisdiccional, es decir, que traspasa la barrera del poder judicial atribuido e ingresa en la esfera de la competencia del legislador, dado que no se atendieron las exhortaciones realizadas en algún momento; o bien porque lo considera necesario para armonizar el ordenamiento jurídico, pero siempre que lo hace, está amparado en que, de no hacerlo, se genera una inconstitucionalidad más grande en el sistema.

c) En las sentencias sustitutivas se expulsa del ordenamiento jurídico la expresión que se considera inconstitucional y se reemplaza por una, que a juicio de la Corte resulta más adecuada al contexto constitucional. Olano las explican como aquellas donde la Corte erradica del ordenamiento la disposición enjuiciada, y sustituye ese vacío por otra regulación concreta ajustada a la constitución, “en cierta medida, estas sentencias son una combinación de sentencia de inconstitucionalidad y sentencia integradora” (Olano, 2004, pág. 580).

Es decir, que en esta tipología se combinan las funciones propias del órgano jurisdiccional en ejercicio del control de constitucionalidad con las del legislador, en un solo cuerpo.

Aun cuando en este texto se han incluido las sentencias interpretativas dentro de la tipología de las sentencias manipulativas, se considera importante la distinción que la profesora Lina Escobar hizo entre las sentencias interpretativas y las sentencias manipulativas, los conceptos relacionados con la función creadora del Tribunal Constitucional (como también lo

interpreta según la profesora Escobar, Francisco Javier Ezquiaga), objeto de la reflexión expuesta en líneas precedentes. Para Escobar (2006):

“ (...) en las primeras, el Tribunal Constitucional restringe el margen interpretativo (prohibiendo obtener de la disposición la norma que el Tribunal indica) o lo elimina (obligando a entender expresada por la disposición únicamente la norma que el Tribunal indica), pero siempre en relación con significados posibles del enunciado, mientras que en las sentencias manipulativas la norma añadida como significado de la disposición (bien sin más o bien eliminando simultáneamente otro de los significados posibles) no es obtenida de ella sino de la Constitución. En definitiva, se está haciendo decir a la disposición lo que no dice. En esas condiciones, la actividad del Tribunal Constitucional es completamente creativa y la norma producida es imposible de conocer antes de su pronunciamiento, ya que simplemente no existía. La creatividad en las sentencias manipulativas es tan intensa que puede afirmarse, incluso, que no se limita a la producción de una nueva norma, sino que por medio de ellas se elabora una nueva disposición normativa” (Pag. 83)

1.3.2.3. Sentencias con efectos temporales (o diferidos en el tiempo). La sentencia que pone fin al proceso, como resultado de la función jurisdiccional produce unos efectos sobre los derechos sustanciales en disputa. Esos efectos, por regla general, son hacia el futuro, en atención a la seguridad jurídica; pero también existen casos en que, por la salvaguarda de la constitución, esos efectos pueden tener carácter retroactivo.

A nivel general, no existe un criterio unificado acerca de los efectos de las sentencias de constitucionalidad. Sin embargo, los ordenamientos jurídicos tienden a darle mayor fuerza a la supremacía constitucional o a la seguridad jurídica. En el derecho comparado, en el caso de los tribunales constitucionales de Austria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia, Rumania, entre otros, los efectos de las sentencias son, por regla general, *ex nunc*, mientras en Alemania, Bélgica, España, Portugal, se consideran los efectos *ex tunc* como regla general. En Suramérica, también existe disparidad de criterios en la materia (Olano, 2004, pág. 582).

Al referirse a las sentencias *ex tunc*, Olano establece que la Corte puede indicar los efectos temporales en su decisión y, excepcionalmente puede retrotraer los efectos de las

sentencias (*ex tunc*), a situaciones ocurridas mientras se encontraba vigente el enunciado inconstitucional. Estos fallos en principio, atentan contra la seguridad jurídica, pues toca directamente situaciones jurídicas y derechos consolidados, “como lo exige el principio de seguridad jurídica, ya que tienen efectos en Colombia desde la adopción de la decisión en Sala Plena, así no se conozca el texto del fallo” (Olano, 2004, pág. 583).

Para explicar las sentencias *ex nunc*, Olano presenta el modelo kelseniano o austriaco, según el cual las decisiones de inconstitucionalidad pueden tener efectos hacia el futuro, y como consecuencia de ello, la disposición es expulsada del ordenamiento jurídico, pero las situaciones consolidadas durante la vigencia de ellas se mantienen incólumes (Olano, 2004, pág. 584).

Vale la pena precisar que, en Colombia, el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, consagra que las decisiones de la Corte Constitucional tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario. Lo anterior impone por mandato de ley, que los efectos de los fallos sean hacia el futuro, a menos que se trate de garantizar el principio de favorabilidad (Vargas, 2011, pág. 20) .

De acuerdo con Paul Rueda, el profesor Olano establece que un tribunal constitucional puede ir más allá de los simples efectos hacia el futuro y establecer un período de gracia, entre la publicación de la declaratoria de inconstitucionalidad y el vigor de esa declaratoria, con el fin de evitar desestabilizar la economía y la política del Estado, siempre y cuando, por virtud del principio de razonabilidad se argumente la adopción de esa medida y el plazo de vigencia razonable (Olano, 2004, pág. 584).

Para Clara Vargas, las sentencias con efectos prospectivos son aquellas en las que la Corte no declara la inexecutable enseguida, teniendo en cuenta que el vacío normativo generaría una situación más grave que dicha declaratoria, “posibilitando la intervención del

legislador para que corrija el vicio de la norma antes de hacerse efectiva dicha determinación, evitando de esta manera las consecuencias perniciosas de una eliminación inmediata de la misma” (Vargas, 2011, pág. 21) .

Las sentencias con efectos prospectivos a que los que se hace referencia anteriormente, son aquellas que tienen una especie de inconstitucionalidad condicionada. Esto significa que la Corte expresa las razones por las cuales la norma es inconstitucional y que como consecuencia de ello debería ser expulsada del ordenamiento jurídico. Sin embargo, por razones políticas entre otras, decide mantener la vigencia de la disposición mientras el legislador se pronuncia al respecto dentro del plazo otorgado en el mismo instrumento, de tal suerte que, si en ese plazo no se legisla lo pertinente, da origen a la inexequibilidad en los términos que la misma Corte disponga.

La Corte Constitucional de Colombia en sentencia C-737 de 2001 desarrolló un test para justificar este tipo de sentencias, en las cuales: i) La Corte debe justificar esta modalidad de decisión; ii) debe aparecer claramente dentro del expediente que la expulsión simple afecta más valores que resultan vulnerados con este tipo de fallo; iii) el tribunal debe explicar por qué recurre a este tipo de decisión y no a una sentencia integradora y, iv) se debe justificar el plazo conferido (Olano, 2004, pág. 585).

1.3.2.4. Sentencias abstencionistas. Esta tipología sugiere cierta apatía del tribunal constitucional sobre el tema objeto de control. En estas sentencias, la Corte se abstiene de definir el problema jurídico puesto a consideración, basada en el límite imaginario entre el control constitucional y la función legislativa.

Dentro de esta clasificación encontramos: a) las sentencias de inadmisibilidad; y b) de recomendación al legislador. En estas sentencias se hace apología a la libertad de configuración

del legislador, pues las de recomendación se consideran bastante respetuosas de la libertad de configuración legislativa (Sarmiento, 2012, pág. 316). Como es necesario profundizar en esta tipología, se explican a continuación, las diferencias entre cada una de estas sentencias.

a) Las sentencias de inadmisibilidad son aquellas en que “la desestimatoria no deriva de razones de mérito, sino más bien de una especie de incompetencia de la Corte Constitucional en relación con decisiones tan complejas que solo al legislador puede legítimamente corresponderle”. Con éstas, la Corte declara un juicio negativo sobre el mérito de la norma legislativa, subrayando que ella, en definitiva, presupone la existencia de un vicio de inconstitucionalidad (Sarmiento, 2010, pág. 235)

b) Dentro de este grupo también se encuentran las sentencias en que se “pretende que la Corte Constitucional emita algunas recomendaciones al legislador, por cuanto la norma demandada no es inconstitucional en sí misma, pero requiere ser perfeccionada para considerarse una adecuada expresión del poder legislativo” (Sarmiento, 2012, pág. 315).

El profesor Sarmiento considera que esta práctica es bastante respetuosa de la libertad de configuración legislativa. En esos casos la Corte de manera didáctica expresa el sentido de la inconstitucionalidad, y por ello le traslada esa comprobación al legislador. Sin embargo, su eficacia parece ser más dudosa que en los fallos que contienen exhortaciones (Sarmiento, 2012, pág. 316).

1.3.2.5. Sentencias exhortativas. Finalmente, se encuentran las sentencias de este tipo, que tal y como lo explica Olano, en ellas se pone en evidencia que existe un riesgo de inconstitucionalidad, dentro de una situación actualmente constitucional. Por consiguiente, se hace un llamado al legislador para atender la situación dentro de un plazo determinado por la Corte, “con la consecuencia adicional que, si ello no ocurre, el Tribunal aplicará directamente

el mandato constitucional en el futuro, pudiendo determinar la nulidad de la norma jurídica respectiva” (Olano, 2004, pág. 581).

Citando a Francisco Javier Díaz Revorio, el profesor Juan Pablo Sarmiento presenta la distinción de varios supuestos de sentencias exhortativas o de *apelación*: “Las primeras tienen como característica común el deseo de evitar la confusión de la política constitucional; las segundas declaran que una situación jurídica es todavía aceptable constitucionalmente, pero añaden una apelación al legislador para que realice una nueva regulación de todo un ámbito jurídico” (Sarmiento, 2012, pág. 297); y las últimas aceptan una ley, pero que a la luz de la Constitución exige su reforma, por virtud de la alteración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la sociedad (Sarmiento, 2012, pág. 297).

A juicio del profesor Sarmiento, estas soluciones del Tribunal Constitucional han sido cuestionadas porque se oponen a la libertad de configuración legislativa, pues aun cuando la Corte declara temporalmente constitucional la disposición enjuiciada, le impone al legislador una materia constitucional que debe ser legislada en “plazos razonables” (Sarmiento, 2012, pág. 297).

Finalmente, concluye que “bajo este ejercicio la Corte antepone la constitución, frente a cualquier otra cosa, aun cuando su legitimidad resulta altamente problemática, fundamentalmente desde la representación popular que supone el órgano judicial” (Sarmiento, 2012, pág. 297).

Como puede verse, esta tipología supone igualmente el direccionamiento de los efectos de la misma en el tiempo, conforme lo explicado en las sentencias con efectos prospectivos.

En este juego de poderes que los Tribunales Constitucionales le plantean al órgano legislativo, es difícil encontrar un mecanismo coercitivo que permita articular las decisiones de

uno y de otro. Solo cuando el interés del Tribunal supera las barreras impuestas por el poder que ejerce, se encuentran decisiones que alteran el ordenamiento jurídico, como en el caso de las sentencias manipulativas.

Capítulo 2

2. Análisis en contexto de los fallos de la Corte Constitucional de Colombia sobre el reconocimiento de los animales como seres sintientes

Delimitando el campo de acción, el caso que ocupa el presente trabajo partirá de la base de que, a finales del siglo XX, con la expedición de la ley 84 de 1989 en Colombia se adoptó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales- en adelante ENPA, se crearon contravenciones y se reguló lo referente a su procedimiento y competencia, aspecto que en un principio se consideró como un avance significativo sobre la protección de los animales en el país.

No obstante, el artículo 7º de ese estatuto, exceptuó de la presunción de actos de crueldad hacia los animales las prácticas de rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos.

La excepción plasmada en dicho enunciado, nació de la necesidad de proteger las prácticas culturales arraigadas en algunos sectores del país, a manera de ejemplo: las corralejas que se llevan a cabo principalmente en la costa caribe, el coleo en los llanos orientales y las corridas de toro en el centro del país y otras ciudades. Es así como germina la discusión entre la protección y defensa de los animales, y la subsistencia de los derechos culturales en Colombia.

Por ello, si bien la ley 84 de 1989 propendió por la protección animal, le dio prelación a las actividades exceptuadas que fueron relacionadas anteriormente, y es precisamente ese criterio, el que abrió la puerta al inconformismo de quienes defienden a los animales, para solicitar su protección integral.

Como consecuencia de lo anterior, a partir de la interpretación que ha venido realizado la Corte Constitucional en ejercicio de sus funciones, se introdujo el concepto de animales como *seres sintientes* en Colombia, que se desarrolló tomando como punto de partida el concepto de *Constitución ecológica* reconocido por la Corte Constitucional desde 1992 a través de la sentencia T-411 de ese mismo año. Sin embargo, cabe resaltar que la Corte ha venido trazando una frontera cada vez más fuerte entre la protección al medio ambiente, el ecosistema y la fauna, y el deber de protección de los animales por su condición de seres sintientes.

Este concepto ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte de manera paulatina, pues de acuerdo con las técnicas de modulación utilizadas en sus sentencias, se evidencia el juego de intereses de dicha corporación, en donde inicialmente se dio preponderancia a la libertad de configuración del legislador.

Lo anterior, lleva a que en el ordenamiento jurídico colombiano, aun permanezca la conservación de prácticas culturales como la tauromaquia o las peleas de gallos sobre la protección de los animales, a pesar de haber impuesto su criterio frente a la protección animal, a través de decisiones que traspasaron las fronteras de su competencia, asumiendo un rol político.

Consecuentemente, en el curso de esa discusión se desató una tensión entre el poder judicial y el poder legislativo, en el que el primero, a través de las sentencias de la Corte Constitucional, se sugiere categorizar a los animales como seres sintientes, pero al mismo tiempo, reconoce que tal formulación es competencia exclusiva del legislador; mientras que al poder legislativo no le interesa legislar sobre la materia. De ello dan cuenta los más de 30 proyectos de ley que se han radicado en el Congreso sobre protección animal, en tan solo 15 años (Sarmiento, Mariño, & Aguilar, 2015), de los que solo 4 se convirtieron en ley, incluida la

reciente ley 1774 de 2016, en la que finalmente se reconoció a los animales como seres sintientes, pero se mantuvo la excepción del artículo 7o del ENPA que hace referencia a las prácticas culturales arraigadas en algunos sectores del país.

En síntesis, la protección integral de los animales es uno de los temas álgidos de la Constitución de 1991, pues un destacado grupo de la población colombiana se ha manifestado a través de marchas y plantones en contra del maltrato animal, mostrando su tendencia a favor del bienestar de estos, aspecto que logró capturar la atención de los gremios taurino, políticos y de la opinión pública en general.

Entre tanto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia no ha sido ajena a este fenómeno, toda vez que a partir del control de constitucionalidad, e incluso, en sede de revisión de tutelas promovidas en defensa de los animales –principalmente en torno a la tauromaquia- han provocado el pronunciamiento judicial, con verdaderos vaivenes, propio de las tensiones interinstitucionales que surgieron de la discusión de este tema, que abarca no solo un componente jurídico, tales como la *protección de la fauna*, el reconocimiento de los animales como *seres sintientes* y las *tradiciones y prácticas culturales*, sino también un componente social, político, económico y cultural.

A continuación, se analizarán las sentencias proferidas por la Corte Constitucional de Colombia en sede de control de constitucionalidad, a través de las cuales se introdujo acompasadamente, el concepto de animales como seres sintientes en el ordenamiento jurídico colombiano, a la luz de las técnicas de modulación aplicadas en cada una de ellas, haciendo énfasis en el contexto en que se expidieron.

2.1. Determinación de la constitución ecológica como punto de partida de la discusión

Antes de iniciar el análisis en contexto de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, a través de los cuales se introdujo el concepto de animales como seres sintientes en Colombia, a la luz de las técnicas de modulación aplicadas en cada uno de ellos, es necesario explicar el preámbulo que esa misma Corte hace sobre el concepto de constitución ecológica, como punto de partida a la discusión que se desarrollaría a partir del año 2005.

Desde sus inicios, la Corte Constitucional de Colombia planteó el concepto de *Constitución ecológica* propuesto a través de la sentencia T-411 de 1992, entendiendo que la Constitución no sirve exclusivamente como fundamento de validez del ordenamiento jurídico, en cuanto a la creación jurídica, sino que también abarca el orden jurídico básico de los muchos sectores de la sociedad. Por lo tanto, en ella surge una Constitución económica con su tríptico: propiedad, trabajo, empresa; una Constitución social, con la legislación de sus relaciones; una Constitución ecológica y una Constitución cultural.

A juicio de la Corte, la Constitución de 1991 a diferencia de la de 1886, no sólo limita el poder de lo permitido, sino que también impone el deber activo de proporcionar un orden político, económico y social justo, *verbi gracia* lo establecido en el preámbulo y en su artículo segundo.

Al respecto, el órgano legislativo no debe manifestarse de manera deliberada dentro de los límites que la constitución le impone, sino que debe desarrollar las disposiciones en ella contenida. La Constitución es el programa de lo que el Estado debe hacer, aquí y ahora, para crear condiciones sociales más justas y libres, o sea, lo que llama Schneider, el "Mito Concreto" (Sentencia No. T-411/92, 1992).

Este análisis primitivo de la Corte, en cabeza del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, abrió las puertas de la discusión frente al respeto de la vida no humana y demás los recursos inmateriales en el ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, la misma Corte ha venido trazando una frontera cada vez más grande entre la protección al medio ambiente, el ecosistema y la fauna, y el deber de protección de los animales por su condición de seres sintientes.

Razón por la cual, aquí se presenta la sentencia C-355 de 2003, que sin lugar a equívocos es la primera que involucra la causa de los animales de manera directa. En este caso, demandaron la prohibición de los vehículos de tracción animal que el Código Nacional de Tránsito Terrestre permitía en algunos municipios de Colombia. El accionante solicitó la inconstitucionalidad del artículo 98 de la ley 769 de 2002, en el que se estableció el término de un año para la vigencia de la prohibición del tránsito urbano de vehículos de tracción animal en unos municipios especificados, y les ordenó a las autoridades de tránsito, retirar los vehículos de tracción animal pues a su juicio viola los derechos a la libertad y al trabajo, entre otros (Sentencia C-355 de 2003, 2003).

Al estudiar este caso, los profesores Cárdenas y Fajardo estimaron que el debate de la Corte se ciñe a la necesidad vial de impedir el tráfico de vehículos de tracción animal en las grandes ciudades, pero prolongó indefinidamente, sin un adecuado sustento fáctico o jurídico, algo que por el peso del desarrollo, la evidencia y el avance mundial tiene que acabarse, así como se acabó en otras ciudades con infraestructura económica y social similar a la de Bogotá (Cárdenas & Fajardo, 2007, pág. xiii).

Ahondando un poco más en el tema, concluyeron que, con ese fallo, la Corte contradijo las fuentes de carácter internacional acerca del animal trabajador y de su bienestar, dejando

abierta y sin regulación la posibilidad de usar equinos en estas labores “como simples instrumentos de la labor” (Cárdenas & Fajardo, 2007, pág. 363), lo cual traería como consecuencia, el atropello de las especies dispuestas para esa actividad.

No obstante, en un aparte de esa sentencia, la Corte con ponencia de Marco Monroy Cabra, se vuelve hacia la protección animal. En consecuencia, manifestaron que dentro de tal regulación no deben olvidarse medidas de protección que eviten el abuso y el maltrato animal, aspectos que habían sido denunciados por más de un interviniente en dicho proceso constitucional. Igualmente, sugirió la eliminación de la comercialización de animales enfermos con destino a los mataderos públicos, esto, a partir de las alertas de la intervención ciudadana (Sentencia C-355 de 2003, 2003)

A juicio de la Corte, las autoridades no pueden ser ajenas a esta realidad, que también debe ser tomada en cuenta al momento de adoptar las medidas pertinentes (Sentencia C-355 de 2003, 2003).

De lo anterior, se desprende que con esta sentencia, la Corte obvió la causa de los animales, al parecer porque la demanda estaba orientada hacia la conculcación de los derechos al trabajo, libre desarrollo de la personalidad y otros, lo cual delimitó el problema jurídico planteado por la Corte.

Sin embargo, como tal y como fue mencionado, desde el año 1992 la Corte propuso el carácter ecológico de la Constitución de 1991 en preservación del medio ambiente, la fauna y la flora como componentes de aquel, debiendo hacer un análisis sistemático de la disposición enjuiciada, pero ello no fue así.

Para comprender el contexto en el que se van profiriendo estas sentencias y las tensiones interinstitucionales generadas entre el poder judicial y el legislativo, resulta importante destacar el impacto que tuvo este fallo en el Congreso.

Siendo así, dentro de las acciones que son menester mencionar, se destaca la radicación del proyecto de ley 258/04 el 2 de diciembre de 2004, por parte del Representante a la Cámara Luis Eduardo Vargas Moreno del partido Liberal, con el objeto de establecer normas para protección, posesión, exhibición y comercialización de los animales domésticos, domesticados o salvajes en cautividad o confinamiento que se encuentren en Colombia; armonizando la convivencia de los mismos y las personas con los posibles riesgos para la sanidad ambiental, la tranquilidad, salud y seguridad de personas y bienes, fijándose las atenciones mínimas que han de recibir los animales en cuanto a trato, higiene y cuidado, protección, transporte y además; establece las normas sobre su estancia en establecimientos especializados, atención sanitaria, comercialización y venta (Sarmiento, Mariño, & Aguilar, 2015). A pesar de la poderosa intención de esta iniciativa, fue retirado por su autor, sin alcanzar, si quiera la ponencia para el primer debate.

Algunos años después, cuando la discusión en torno a la protección de los animales empezaba a tomar forma, la Corte Constitucional en sentencia T-760 de 2007, con la participación de los magistrados Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa y Clara Inés Vargas Hernández (con ponencia de ésta última), se hizo apología al ENPA con fundamento en el concepto de constitución ecológica que venía propuesto desde 1992, reafirmando que a partir de la Constitución de 1991 se imprimió un nuevo paradigma normativo que impone obligaciones al Estado y también a los particulares; pues en la ponencia se determinó que el bien jurídico, establecido en el derecho al *medio ambiente sano* no es resultado

de las labores aisladas que quiera o pueda adelantar el Estado, sino que es la consecuencia directa de la decidida concurrencia de este, en el ámbito interno e internacional y en el vínculo de la libertad de cada persona frente a tal objetivo (Sentencia T-760/07, 2007).

Igualmente, se reconoció que las disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano, desarrollado en el marco de la Constitución de 1991, entre otros, el Código de Recursos Naturales y sus decretos reglamentarios, prevén un cambio de paradigma de las acciones deliberadas del hombre sobre los animales, hacia la estricta regulación que propende por la preservación de las demás especies vivientes (Sentencia T-760/07, 2007).

Lo anterior, pone en evidencia que aunque en ese momento, la configuración de los animales como seres sintientes no ocupaba un lugar trascendental en la agenda de la Corte Constitucional de Colombia, algunos de sus pronunciamientos sí se orientaban hacia la sensibilización de las especies no humanas, a partir del concepto de la constitución ecológica definida desde 1992.

Habiendo señalado la definición de constitución ecológica, de la que parte la Corte para la discusión frente al respeto de la vida no humana y demás recursos inmateriales en el ordenamiento jurídico colombiano, se presentará a continuación el análisis de las sentencias que trazaron una frontera entre la protección al medio ambiente, el ecosistema y la fauna, y la protección de los animales por su condición de seres sintientes, a la luz de las técnicas de modulación aplicadas en cada una de ellas, haciendo énfasis en el contexto en que se expidieron.

2.2. Técnicas de modulación utilizadas por la Corte Constitucional de Colombia en las sentencias que reconocieron a los animales como seres sintientes en Colombia

Tal y como fue anunciado, en esta parte del documento se analizarán los fallos de la Corte Constitucional de Colombia, proferidos principalmente por virtud del control de constitucionalidad del Reglamento Nacional Taurino y del ENPA, en donde por regla general, se prohíbe el maltrato animal excepto en las prácticas de rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos; a través de los cuales, se introdujo paulatinamente el concepto de animales como seres sintientes en el ordenamiento jurídico colombiano, a la luz de las técnicas de modulación aplicadas en cada una de ellas, haciendo énfasis en el contexto en que se expidieron.

2.2.1. Sentencias de inadmisibilidad: La libertad de configuración legislativa como criterio para abstenerse de legitimar la protección animal. Se mencionó anteriormente que las sentencias abstencionistas sugieren cierta apatía del tribunal constitucional sobre el tema objeto de control. Bajo este criterio, la Corte se abstiene de definir el problema jurídico puesto a consideración, basada en el límite imaginario entre el control constitucional y la función legislativa.

Dentro de esta clasificación se encuentran las sentencias de inadmisibilidad, que son aquellas en que “la desestimación no deriva de razones de mérito, sino de una especie de incompetencia de la Corte Constitucional relacionada con decisiones tan complejas que solo al legislador puede legítimamente corresponderle” (Sarmiento, 2010, pág. 235).

En este primer grupo se encuentran las sentencias proferidas por virtud del estudio de constitucionalidad de la fiesta brava en Colombia. Aquí se estudiarán, en su orden, las

sentencias C-1192 de 2005; C-115 de 2006; C-367 de 2006; C-761 de 2009 y; C-899 de 2012, a través de las cuales, la Corte Constitucional consideró que la tauromaquia es un tema tan complejo, que solo al Congreso puede corresponderle.

Este recorrido inicia con la sentencia C-1192 de 2005, producto de la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 22 y 80 parciales de la Ley 916 de 2004 (por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino -en adelante RNT-), amparada en la vulneración de los principios de la dignidad humana, considerando que al permitirse por parte del legislador la participación de los ciudadanos en ritos crueles (corridas de toros), se atentaba contra la moral, pues implica la promoción de actividades violentas en todo el territorio (Sentencia C-1192/05, 2005) .

Sea lo primero advertir, que la ponencia de esta sentencia correspondió al magistrado Rodrigo Escobar Gil, reconocido aficionado taurino a nivel nacional, quien parafraseando la norma, estableció que la definición de la actividad taurina como *expresión artística*, fue dada por el legislador en virtud de la configuración normativa que en él radica.

En esa oportunidad, la mayoría de la Corte reconoció que a pesar del dolor y el sacrificio que padece el toro durante la fiesta brava, ello no corresponde a actos de crueldad o salvajismo, sino a expresiones artísticas, "de las disyuntivas constantes a las que se enfrenta el quehacer humano: fuerza y razón, arrojo y cobardía, vida y muerte" (Sentencia C-1192/05, 2005). Apreciaciones que se apoyaron en el concepto emitido por el Procurador General de la Nación de la época, para finalmente afirmar de manera categórica que:

"A juicio de esta Corporación, las corridas de toros y en general los espectáculos taurinos, corresponden a una manifestación viva de la tradición espiritual e histórica de los pueblos iberoamericanos, como lo es Colombia, y por lo mismo, forma parte del patrimonio intangible de nuestra cultura, especialmente protegida por la Constitución (C.P. arts. 70 y 71), que como tal puede ser definida y regulada por el legislador" (Sentencia C-1192/05, 2005) .

De otra parte, esa misma Corte consideró que, a través de la tauromaquia no se desconocían las prohibiciones a las torturas, penas y tratos crueles de que trata la Constitución de 1991, pues aquellos se predicaban de la persona humana, imponiendo una interpretación antropocéntrica de la misma (Sentencia C-1192/05, 2005) .

Finalmente, la Corte concluyó que resulta constitucional el hecho que el congreso hubiere reconocido la tauromaquia como una expresión artística del ser humano, por virtud de la libertad configurativa del legislador. Sin embargo, ese reconocimiento puede ser variable, por cuenta y riesgo del mismo, "inclusive negándole al citado espectáculo su condición de expresión artística y cultural del Estado y de quienes la practican" (Sentencia C-1192/05, 2005).

Como se observa, la Corte reconoció que la actividad taurina no es aceptada por las mayorías, pero cuenta con una protección especial por ser minoría y al respecto manifestó:

Hoy en día a pesar de que la actividad taurina es reprobada por un sector de la población, y en especial, por las asociaciones defensoras de animales, no puede desconocerse que la misma históricamente ha sido reconocida como una expresión artística que manifiesta la diversidad cultural de un pueblo. (Sentencia C-1192/05, 2005)

Ésta, resultó ser una gran oportunidad para la mayoría de los magistrados que integraban la Corte en ese momento, quienes legitimaron a través de su jurisprudencia la fiesta brava como una expresión artística del ser humano, considerando que no estaba dentro de su órbita funcional refutar la voluntad del legislador plasmada en el ENPA y en el RNT.

A pesar de ello, desde entonces, dos de los magistrados que conformaban esa Corte, Humberto Sierra Porto y Jaime Araujo Rentería disintieron de los conceptos aprobados por la mayoría. El primero de ellos, salvó parcialmente su voto, porque a su juicio la expresión “los espectáculos taurinos son considerados una expresión artística del ser humano” declarada exequible, carece de precisión, es ambigua en exceso y sólo proyecta incertidumbre sobre el

alcance de los derechos y libertades de los ciudadanos y, por consiguiente, también acerca de cuáles han de ser las obligaciones y deberes estatales (Sentencia C-1192/05, 2005) .

Aun cuando el magistrado Humberto Sierra Porto dedicó algunas líneas de su salvamento para explicar el arraigue constitucional que tienen los animales por el simple hecho de serlo, se observa que los argumentos no tuvieron eco, toda vez que centró el problema jurídico en torno a la fuerza cultural que pudieren tener las corridas de toro, pero como lo criticaron en su momento los profesores Cárdenas y Fajardo, el problema aquí planteado, va más allá de lo cultural y subyace precisamente en la calidad que ostentan los animales de todas las especies, como seres sintientes.

Por su parte, el Magistrado Araujo Rentería se apartó completamente del fallo, pues denunció abiertamente la presión que ejercen los gremios favorecidos con estas prácticas taurinas sobre el Congreso, pero también sobre la misma Corte, al manifestar que: "el debate acerca de este tema no se trata meramente de un asunto de gustos o preferencias subjetivas, ni de la continuidad de una tradición por el mero hecho de serlo, o del hecho fáctico de su aceptación por determinados sectores de la sociedad" (Sentencia C-1192/05, 2005), expresiones que evidenciaron lo que ocurría entonces al interior de la Corte Constitucional en relación al tema estudiado.

En síntesis, con esta decisión, la mayoría de la Corte exaltó las razones que el legislador tuvo para la expedición del RNT, y se abstuvo de emitir pronunciamientos que alteraran las condiciones de la permisión de la fiesta brava, amparados en la configuración normativa del legislador (Sentencia C-1192/05, 2005). Sin embargo, el único argumento para justificar su decisión, fue el pluralismo y la protección de las minorías, aspecto que puso en evidencia la

tensión que desde entonces se gestaría entre las instituciones estatales y los gremios taurinos por mantener, al precio que fuere, la fiesta brava en Colombia.

Al año siguiente, la Corte profirió la Sentencia C-115 de 2006 en la que ratificó su posición bajo el mismo criterio de la libertad de configuración legislativa. En esta sentencia, se estudió en su integridad el RNT.

La sustanciación de esta sentencia correspondió al magistrado Jaime Córdoba Triviño, quien se encontraba en similares condiciones a las del ponente de la sentencia anterior, al ser un reconocido aficionado a las corridas de toros, razón por la cual, durante el trámite del proceso de constitucionalidad fue recusado junto al magistrado Escobar Gil, bajo el entendido que, por su conocida afición taurina, se afectaría la imparcialidad en la decisión.

La recusante adujo que Córdoba Triviño tenía interés en la decisión respecto de la inconstitucionalidad (parcial) del Reglamento Nacional Taurino, pues según su argumento, era evidente que aquellas personas que asisten a corridas de toros, como en este caso, tenían como válida y legítima la utilización de bovinos, su maltrato sistemático y premeditado, así como su posterior muerte como espectáculo para diversión de las masas, aportando al expediente notas periodísticas donde se muestran los magistrados recusados como espectadores de la fiesta brava (Expediente D-5919, 2006, págs. 152-154).

Irónicamente, el trámite de recusación fue despachado desfavorablemente por el Magistrado Sierra Porto por improcedente, toda vez que se sustentaba en razones impertinentes, y a su juicio:

La condición subjetiva de los magistrados de quienes se solicita la recusación, en el sentido de haber asistido a corridas de toros, no los exime de la obligación de tomar una decisión en derecho. En otras palabras, no los coloca por fuera del orden jurídico. De hecho, cualquier posición que tengan los magistrados de la Corte Constitucional frente a las mencionadas corridas, no los libera de atender los principios constitucionales vigentes en la Constitución de 1991. La estructura de poderes públicos del Estado, los

asociados y detentadores del orden estatal y el mismo sistema jurídico exige que la decisión que sobre este tema tome la Corte Constitucional, esté sólidamente fundamentada en la Constitución. (Expediente D-5919, 2006, págs. 315-332)

A pesar de que, en su momento se adujo que las notas periodísticas carecían de la entidad jurídica suficiente para demostrar que un magistrado podría tener parcializada su decisión, es menester acotar que Jaime Córdoba Triviño, luego de que culminó su periodo en la Corte Constitucional, fungió como apoderado judicial de la Corporación Taurina de Bogotá en el proceso constitucional D-9027, que terminó con la sentencia C-899 de 2012 donde se ventiló la constitucionalidad del Reglamento Nacional Taurino, como se mostrará más adelante.

Así mismo, el ex magistrado recusado, en una entrevista de radio del programa "Último tercio, toros para todos" de Radio Viva de Cali- Colombia que data del año 2012, manifestó estar de acuerdo con las corridas de toros, entre otras cosas, porque los festejos taurinos compartidos o no por la mayoría, dado el maltrato al animal, cuentan con respaldo legal y constitucional, aspecto que pone en evidencia las causas reales de las posturas que fueron asumidas por aquella Corte, integrada por aficionados a la fiesta brava.

En ese mismo sentido, para la Corte estaba claro en aquel momento, en cuanto a la protección de los animales y específicamente de los toros que “la lidia de toros no podía considerarse, en tales términos, como un acto de violencia, pues en ella no concurría trato alguno incompatible con la dignidad del hombre” (Sentencia C-115/06, 2006).

En este caso, se puso en evidencia una Corte que entraba a resolver un problema jurídico, inmersa en una situación de parcialidad. A pesar de que los accionantes en este proceso presentaron la recusación contra Córdoba Triviño y Escobar Gil, la Corte hizo caso omiso a dichas advertencias. De donde se concluye que el gremio taurino tenía injerencia en la actividad judicial, la cual, a través de la modulación de sus sentencias, estaba orientado la agenda política

de la protección animal hacia las pretensiones de favorabilidad de la tauromaquia como una expresión artística del hombre, desarrollando el mismo criterio de la sentencia anterior. En esta ocasión, nuevamente, los magistrados Araujo Rentería y Sierra Porto salvaron su voto. Es así como Sierra Porto manifestó en su salvamento de voto que:

Las corridas de toros son reconocidas por la Ley en virtud del carácter abierto de la Constitución. Lo dispuesto en la Ley debe entenderse, por tanto, como el reconocimiento de una práctica social permitida pero no puede comprenderse en tanto “patrimonio intangible de nuestra cultura”. Por una parte, se trata de una actividad que conlleva el sufrimiento de animales y si bien todavía tales expresiones son aceptadas por una parte de la sociedad, existen fuertes tendencias que se orientan a exigir su prohibición. Por otra, y, en estrecha relación con lo anterior, es factible que el Legislador futuro resuelva establecer una política legislativa que se dirija a limitar la forma en que se desarrollan las corridas de toros y, en este sentido, impida que se de muerte al toro o sencillamente prohíba las corridas de toros (Sentencia C-1192/05, 2005).

También sostenía Sierra Porto, que se avizoraba cierto relativismo al afirmar que las corridas de toros fueran una expresión cultural, y en ese sentido manifestaba:

En muchas partes del mundo ha sucedido que expresiones culturales calificadas en algunas épocas de artísticas han sido luego prohibidas por considerarse degradantes de la dignidad humana y por herir la sensibilidad de los humanos. No todas las expresiones deben poder ser admitidas. Aquellas manifestaciones de la cultura que significan lesionar la dignidad humana tienden a ser rechazadas. El respeto a los derechos humanos se ha entendido como un avance en esa dirección. Incluso se ha dado un paso más en el sentido de querer superar la visión del mundo exclusivamente antropocéntrica para reconocer, justamente, que dentro de ese tejido básico es necesario incluir también a los animales y, en general, al medio ambiente (Sentencia C-1192/05, 2005).

Para entonces, la argumentación disidente aun tomaba el criterio primitivo expuesto por la Corte en 1992 frente al carácter ecológico de la Constitución, pues el mismo Magistrado expresó en su salvamento de voto que la constitución de 1991, propugna por la adopción de políticas por medio de las cuales, se garantiza la protección del medio ambiente, y de distintas especies animales. Por lo tanto, las políticas del gobierno nacional deben orientarse a proteger estos valores, ya que “no existe, precepto constitucional alguno capaz de justificar el maltrato y

posterior muerte de un animal sólo para efectos de divertir a un público determinado o para hacer evidente la destreza, la elegancia, la valentía o el arrojo humano” (Sentencia C-1192/05, 2005).

Por su parte, el magistrado Jaime Araujo Rentería salvó su voto frente a la constitucionalidad del RNT, y nuevamente reprochó las decisiones basadas en las preferencias subjetivas de los magistrados que proyectaron y votaron a favor de la fiesta brava, pues dicha tradición en su entender, se encuentra ligada con actos de violencia contra animales, que no tiene justificación alguna, salvo "que se trate de argumentar a partir de razones basadas en preferencias subjetivas" (Sentencia C-1192/05, 2005).

Mientras tanto, el magistrado Manuel Cepeda Espinosa, con un texto que coloquialmente podríamos catalogar como romántico, aclaró su voto insinuando que, en aras de evitar la disparidad y la inseguridad jurídica, la institucionalidad de la Corte debe abstenerse de disentir en las decisiones, al manifestar:

No se trata de seguir una regla de consenso, inapropiada en un contexto pluralista y en todo caso superada por la divulgación de los votos de cada magistrado. El objetivo esencial es contribuir a la consolidación de una institución que, como la corte Constitucional, adopta decisiones que definen el rumbo del país en temas que despiertan enorme sensibilidad, tienen un impacto profundo o están sujetos de manera recurrente a la dura prueba del litigio constitucional. (Sentencia C-115/06, 2006)

Se entiende que el magistrado Cepeda Espinosa está haciendo una antesala a la polémica, que estaría próxima a desatarse frente a la tensión entre la protección integral de los animales por su condición de seres sintientes y el derecho a la tradición cultural, como en el caso de la tauromaquia; haciendo un llamado a la unidad de la Corte, para fortalecer el argumento que le impedía a esa corporación definir la situación a través de sus pronunciamientos.

En este caso, nuevamente a través de una modulación abstencionista, la Corte se abstuvo de definir el rumbo que debía seguir el maltrato animal, específicamente sobre las corridas de

toros en Colombia, a partir de criterios aparentemente jurídicos y respetuosos de la libertad de configuración legislativa. Sin embargo, los salvamentos de voto pusieron en evidencia la tensión generada por los responsables de definirlo, pues se observa que los magistrados encargados de definir la suerte de las corridas de toros en el país son reconocidos aficionados a la fiesta brava, por lo que difícilmente se adoptaría una decisión en contra de ella.

Durante ese mismo año (2006), la Corte se pronunció nuevamente, esta vez lo hizo a través de la Sentencia C-367 del 16 de mayo de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández. En esta ocasión, resulta imperioso destacar que una vez más, en el curso del estudio de la constitucionalidad de las normas acusadas en el proceso contra el RNT, la actora recusó a los magistrados Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, por ser reconocidos aficionados de las corridas de toros.

Pese a ello, mediante Auto No. 154 del 16 de Mayo de 2006, la Corte declaró no fundada la recusación propuesta, por improcedente en tanto se sustenta en razones impertinentes (Sentencia C-367/06, 2006, págs. 342-348), citando el auto 188A de 2005, a través del cual se resolvió la recusación en el proceso citado, insistió en que a pesar de que "los jueces como ciudadanos activos dentro de la sociedad, profesan ideologías, forman parte de partidos políticos, son miembros de confesiones religiosas, son activos investigadores académicos, etc., lo cual no los inhabilita en principio para decidir" (Auto 188A/05, 2005), pues la sentencia debe atender al orden constitucional, a partir del argumento jurídico que fundamenta la decisión judicial.

Como se observa, quien resuelve la recusación, lanza un espaldarazo al desinterés en la protección de los animales generalizado en la Corte, pues el auto que la resuelve, plantea de manera muy abierta el deber ser del juez constitucional y la metodología que debe usar para

adoptar la decisión judicial. A pesar de lo anterior, esas premisas no incorporan el caso concreto, en el que de manera reiterada y fehaciente, se venía demostrando la parcialidad de algunos miembros de esa corporación, aspectos que solo con el transcurrir del tiempo cobrarían relevancia jurídica y política.

Por otro lado, la Corte reiteró jurisprudencialmente que la actividad taurina representa una manifestación cultural para el país, una expresión artística del ser humano que debe ser protegida y desarrollada por el Estado, en pro de principios y valores constitucionales, motivo por el cual ordenó estarse a lo resuelto en Sentencia C- 1192 de 2005. Consecuente con esto, nuevamente los magistrados Jaime Araujo Rentería y Humberto Sierra Porto salvaron su voto contra la Sentencia C- 367 de 2006.

Es así como Sierra Porto, en su salvamento de voto sostuvo que las corridas de toros no pueden ser equiparadas a los derechos fundamentales de tercera generación, dado que sobre estas no se genera una identidad nacional homogénea, y lejos de eso, lo que producen las corridas de toros son enfrentamientos entre los nacionales (Sentencia C-367/06, 2006), evidenciando que el tema de la protección animal se empezaba a convertir en un asunto de interés nacional en el ámbito social, político y judicial.

Por su parte, el magistrado Jaime Araujo Rentería, en su salvamento de voto ratificó que la práctica de lidia de toros no debe considerarse como cultura y mucho menos como arte, en razón a que no se encuentran argumentos objetivos para la justificación de esta práctica, que hasta el momento se basan en preferencias subjetivas.

A partir de este punto, la Corte volvió a ignorar el estudio frente a la protección de los animales. Este era el tercer proceso constitucional en que se discutía la imparcialidad de los magistrados que conforman la Corte, cuya mayoría insiste, de manera sistemática, en que las

preferencias subjetivas no afectan la decisión judicial, camuflando su posición en que el tema de la tauromaquia, es de tal envergadura que su regulación solo puede corresponderle al Congreso.

De esta manera, se evidencia que la Corte marcó una tendencia con la técnica utilizada para frenar los intentos de igualar la protección de los animales en Colombia, tres fallos consecutivos demostraron su desinterés en acabar con las fiestas bravas, amparados en la libertad de configuración legislativa para cubrir el trasfondo político marcado por un grupo asociado a ellas.

Aunado a lo anterior, como reflejo de la puja interna de la Corte Constitucional, en el Congreso de la Republica se radicó el 3 de Agosto de 2007 el proyecto de ley: "Por la cual se modifican y adicionan algunos artículos del Decreto 1355 de 1970 - Código Nacional de Policía", en conjunto por los entonces representantes a la cámara Claudia Yadira Inés Rodríguez de Castellanos y Luis Felipe Barrios Barrios, que buscaban adicionar como nuevas causales de detención transitoria en las unidades permanentes de justicia por la Policía Nacional, la de maltratar animales domésticos y silvestres. Sin embargo, fue archivado por tránsito de legislatura.

Para el periodo legislativo 2007- 2008, la actividad del congreso de la Republica sobre la protección animal fue más activa. Durante la mencionada legislatura se radicó el proyecto de ley 255 de 2008, el 5 de marzo de 2008 por los congresistas David Luna Sánchez, Simón Gaviria Muñoz y Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, "por medio de la cual se reforma el Estatuto Nacional de Protección de los Animales", con el que se buscaba ampliar el marco de protección de los animales en el país, con el fin de prevenir las situaciones de crueldad de las que son víctimas e impedir las situaciones de maltrato.

Adicionalmente, se buscaba un régimen sancionatorio efectivo, así como la implementación de campañas educativas y de prevención de estas agresiones en cabeza de las entidades del Estado. Este proyecto de ley alcanzó a llegar a ponencia para segundo debate cuando fue archivado por tránsito de legislatura.

Posteriormente, durante la legislatura 2008 – 2009, fue radicado el proyecto de ley 19 de 2008 el 21 de Julio de ese mismo año, por el representante Jorge Ignacio Morales Gil *por medio del cual se modifica el RNT*, que pretendía la celebración de los espectáculos tradicionales con la intervención de animales, siempre que se vengán celebrando consuetudinariamente, amparado en la necesidad e interés de pervivencia del patrimonio tradicional cultural de las distintas regiones del país, siempre y cuando no se humille, lastime, hiera o mate a los animales utilizados y manipulados para realizar estas fiestas. De nuevo, el esfuerzo por sacar adelante un proyecto de ley en busca de la protección de los animales fue socavado, dado que también fue archivado por tránsito de legislatura.

Si bien es cierto, que la presente investigación empezó manifestando que con la expedición del ENPA se obtuvieron los primeros vestigios de la protección animal en Colombia, no menos lo es, que solo hacia el año 2008 se acentuó la búsqueda de la protección integral de los mismos.

De lo anterior se desprende que, de las tres demandas que se presentaron contra el Reglamento Nacional Taurino, todas fueron inadmisibles para la Corte Constitucional, considerando que ello debía definirlo el legislador, a pesar que en dichos procesos se demostró la injerencia del gremio taurino sobre la actividad judicial. Como reflejo de esto, se produjo la iniciativa parlamentaria de proyectos de ley que buscaban la protección integral de los animales, pero que tampoco tuvieron resultados favorables, puesto que también fueron archivados.

En síntesis, aun cuando se puede afirmar que hacia el 2008 la protección de los animales se encontraba en la agenda del Estado colombiano, la Corte, a través de sus pronunciamientos abstencionistas, hizo parecer como si el tema no generara un interés por estudiar de fondo el asunto puesto a su consideración, pues sus fallos estaban cargados de la subjetividad que alimentaba un gremio dirigido por miembros de la vida política del país, conformados por el Procurador General de la Nación de la época, congresistas e inclusive de los mismos magistrados de la Corte Constitucional.

Lo anterior se ratificaría años después, con lo sucedido en diciembre de 2016, durante el trigésimo quinto Congreso Nacional de Ganaderos organizado por Fedegán, evento que congregó a los representantes de este sector y de la política nacional, tales como Alejandro Ordoñez Maldonado, ex procurador de la República, Sofía Gaviria Correa, senadora por el Partido Liberal, José Félix Lafourie presidente ejecutivo de la entidad y al actual senador Álvaro Uribe Vélez, entre otros, quienes durante su intervención coincidieron en que el gremio de ganaderos "ha ayudado a construir empleos, superar la pobreza y mejorar la economía nacional" (Pastori, 2016).

Más adelante, en el 2009, por primera vez se demandó la constitucionalidad del artículo 7o del Estatuto Nacional de Protección Animal, donde se exceptúa de la prohibición del maltrato las prácticas de rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos; que terminó con la sentencia C-761 de 2009 en donde la Corte se inhibe para pronunciarse sobre el fondo del asunto, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Durante el curso de este proceso constitucional en el año 2009, momento en que se reapertura la discusión en torno a la protección de los animales por cuenta de la fiesta brava, la Revista Semana publicó una entrevista realizada a Felipe Negret de la Corporación Taurina de

Bogotá (quien otorgaría poder a Jaime Córdoba Triviño en el 2012, en los términos antes señalados), denominada "Si no hay toreo, desaparecerá el toro de lidia", que se produjo por cuenta del concepto favorable que el Procurador envió a la Corte a favor de la fiesta brava. A la pregunta: "¿Van a toros los magistrados de la Corte Constitucional?", Negret contestó sin vacilar: "Los que no van son los que salvan el voto" (Revista Semana, 2009).

Esta entrevista publicada por Semana muestra la influencia que el gremio de taurófilos ejercía sobre las decisiones que se venían tomando en la Corte. Todo lo cual había quedado registrado en los salvamentos de voto y las solicitudes de recusación revisadas, y que se comprueban con las declaraciones públicas realizadas por Negret, en representación de la Corporación Taurina. Salta a la vista que este gremio era el empoderado en la defensa de las llamadas tradiciones artísticas, de donde las peleas de gallo y otras actividades simplemente se adherían, pues no tenían la relevancia suficiente para lograr un espacio en la agenda de los poderes públicos del país.

En esta oportunidad, salvaron el voto los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Mauricio González Cuervo y María Victoria Calle, quienes consideraron que la Corte debió pronunciarse sobre el fondo del asunto, pues con el criterio de la mayoría, le impusieron cargas procesales al actor que no debía asumir.

En este punto, se destaca el análisis de la magistrada Calle, quien consideraba que ese tema hacía parte de la agenda social de Colombia en ese entonces, frente a la exigibilidad a todo ser humano de las normas fundamentales, en su relación con los animales, y que si bien la Corte no estaba obligada a aceptar las acusaciones del demandante, por lo menos, sí debió ofrecer la interpretación sobre el punto- pues de eso se trata el control constitucional, por medio del cual

se hubiera podido derivar, la adopción de decisiones institucionales, de acuerdo con los procedimientos democráticos establecidos (Sentencia C-761 de 2009, 2009).

Las palabras de la magistrada Calle muestran en esta ocasión, que la Corte se apartó de la discusión que habían iniciado desde el 2005 de una manera mucho más abierta, sin rendir explicaciones de fondo, pero también insinuó que la solución a dicha problemática no estaba en cabeza del organismo jurisdiccional, sino que éste solo advertiría al organismo competente la necesidad de una solución legislativa, como en efecto ocurrió años más tarde.

Para finalizar este primer ciclo de sentencias abstencionistas, se presenta la C-899 de 2012 con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, donde se estudió la constitucionalidad de los artículos 14 y 15 del RNT, que regulan los requisitos para la celebración de espectáculos taurinos.

Aun cuando en el año 2010 se presentó un avance significativo, a través de la introducción del concepto de animales como seres sintientes en el ordenamiento jurídico colombiano, para la comunidad en general, esa sentencia no generaba una alteración del orden normativo, pues no expulsó del ordenamiento jurídico la excepción al maltrato animal; en sentido contrario, la misma desestabilizó el sistema que regulaba las corridas de toros, dejando a discreción de los funcionarios de turno, la suerte de las mismas.

En medio de la crisis de inseguridad jurídica en que se encontraba la protección animal en Colombia, especialmente por la negativa de varios alcaldes del país, entre otros el de Bogotá, de otorgar los permisos para llevar a cabo las festividades en las que se maltratasen animales desarrollados a través de actos administrativos, supuestamente amparados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la revista Dinero publicó las "Corridas de toros en Colombia: ¿morirán de viejas?", donde dejaron claro que en el entender de los gremios promotores de la

fiesta brava, esa "actividad está protegida por una sentencia del 2010 de la Corte Constitucional, que reconoce el derecho de los ciudadanos a mantener vivas sus tradiciones culturales". Del mismo modo, se evidenció en tal artículo, que en varios círculos de la sociedad colombiana "la fiesta brava todavía parece contar con el apoyo de los principales medios de comunicación, así como de la élite política y económica del país" (Revista Dinero, 2012).

Lo anterior deja ver que, el gremio de taurófilos influenciaba la jurisprudencia constitucional en torno a la realización de la fiesta brava, a través de la articulación de decisiones políticas; influencia que había logrado desestabilizar el sistema normativo de las corridas de toros en Colombia, creando una tensión al interior de la rama judicial, e inclusive con las demás ramas del poder, generando inseguridad jurídica por las decisiones contradictorias entre la jurisdicción contencioso administrativa y la constitucional, como se mostrará más adelante.

En este proceso, radicado bajo el serial D – 9027, se observó que el ex magistrado Jaime Córdoba Triviño, quien durante su magistratura defendió a ultranza las corridas de toros, fungió como apoderado especial de la Corporación Taurina de Bogotá durante la intervención ciudadana, manifestando con ímpetu que el diseño normativo que se desprende de las normas acusadas no es producto de un exceso del legislador, (Sentencia T-296/13, 2013), argumentos que fueron acogidos por la Corte.

En cuanto a la protección animal, la Corte Constitucional, en lo que se considera como un retroceso a la concepción jurisprudencial desarrollada en la sentencia C-666 de 2010 -que se revisará más adelante-, esgrimió que de acuerdo con la legislación colombiana, la actividad taurina es una manifestación cultural que, por ese carácter, no es objeto de actual prohibición general. A pesar de que dos años atrás, con un fallo contundente, la Corte había concluido que la lidia de toros atenta contra los animales por su condición de seres sintientes.

En el mismo sentido, con un criterio antagónico al expuesto en el año 2010, el máximo tribunal constitucional determinó que el deber de protección animal, se ha visto limitado en los casos en que se contrapone a la libertad de cultos, a los hábitos alimenticios de los seres humanos, a la investigación y experimentación médica, pues cede ante las costumbres alimenticias de la especie humana, al admitirse el sacrificio de animales para el consumo humano (Sentencia C-889/12, 2012).

Así las cosas, es evidente que la Corte en la sentencia C-889 de 2012, se apartó del cambio jurisprudencial de 2010, pues se limitó a destacar que existe cosa juzgada sobre el reconocimiento del toreo como actividad artística por parte del legislador a partir de la sentencia C-1192 de 2005; y así mismo, pasó por alto el estatus de seres sintientes otorgado a los animales, desechando la modulación de la sentencia C-666 de 2010 al considerar que la restricción del toreo es igual a la limitación de un derecho fundamental (Sentencia C-889/12, 2012). Cabe precisar que en esta oportunidad la Corte, a sabiendas que las alarmas sobre la protección animal estaban encendidas, no orientó su estudio hacia el maltrato animal, sino a los requisitos y trámites para espectáculos taurinos.

En cuanto a la actividad legislativa del Congreso sobre la protección animal, como reflejo de la sentencia analizada, se presentaron 2 proyectos de ley durante la legislatura 2011 - 2012. Es así como el 20 de marzo de 2012 se radicó el proyecto de ley “Por medio de la cual se adiciona la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia. (Violencia contra los animales)” por los congresistas Camilo Armando Sánchez Ortega, Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Liliana María Rendón Roldán y Carlos Andrés Amaya Rodríguez, el aludido proyecto procuraba asegurar que los niños no sean expuestos a la presencia de espectáculos públicos donde se agreda, maltrate, torture, violente, lesione o se le dé muerte a un animal. De

igual forma, buscaba garantizar que los medios de comunicación no publicaran, divulgaran ni realizaran transmisiones de este tipo de espectáculos públicos en horarios familiares. Este proyecto logró publicar ponencia de primer debate antes de ser archivado por tránsito de legislatura el 20 de Julio del 2012.

Los mismos autores del anterior proyecto, a través de la comisión séptima del Senado radicaron el proyecto de ley “Por medio de la cual se adiciona el Decreto 2737 de 1989. (Maltrato animal)” el 27 de marzo de 2012, con el propósito de establecer medidas para evitar que los menores de edad presenciaran espectáculos en donde se le dé muerte o se lesione la vida de un animal. Este proyecto, aunque alcanzó a que se publicara ponencia de segundo debate, fue archivado por tránsito de legislatura el 20 de julio de 2013.

Es importante mencionar que ambos proyectos, en cuanto a su contenido, buscaban lo mismo, pero modificando dos normas distintas, el primero recaía sobre el Código de Infancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2006, el segundo sobre el Código del Menor o Decreto 2737 de 1989.

Adicionalmente, vale la pena aclarar el sentido en que se manifestó el análisis de ésta última sentencia, la falta de determinación frente a la protección de los animales por parte de la Corte Constitucional, en contraste con el desinterés del Congreso en legislar la materia y la inminente adopción de medidas administrativas sobre el caso, alcanzó a generar un alto grado de inseguridad jurídica sobre el concepto de protección animal y las competencias administrativas para hacerlo valer. Motivo por el cual, regresó a la misma Corte en el año 2013, por cuenta de una acción de tutela en donde la Corporación Taurina de Bogotá demandó a la Alcaldía de Bogotá y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, por vulnerar sus derechos al debido proceso y a la libertad de expresión artística, al terminar anticipadamente el contrato

sobre el uso de la Plaza de Toros de Santa María para realizar espectáculos taurinos, suspender la venta de abonos para la temporada 2013 y la cancelación de novilladas adelantadas en el marco del Festival de Verano que desencadenó en la sentencia T-296 de 2013 con ponencia de Mauricio González Cuervo (Sentencia T-296/13, 2013).

El trámite de esta revisión, también se vio envuelto en prejuicios de la opinión pública por la afición del magistrado a quien le asignaron la ponencia, en esa oportunidad El Espectador, informó que en el año 2010 el magistrado Mauricio González Cuervo dio una entrevista en la cual dejó entrever su apoyo a la llamada fiesta brava, quien en su momento expresó literalmente “que valora este espectáculo como una manifestación cultural y preferiría que no hubiera prohibición a estas expresiones de los ciudadanos" (El Espectador S. J., 2015), motivo por el cual debería declararse impedido.

En esta ocasión, las denuncias públicas que ponían en tela de juicio la objetividad de la ponencia tampoco tuvieron el efecto pretendido, pues la tutela se falló a favor de la Corporación Taurina.

En el fallo mencionado, la Corte anuló el acto administrativo por la cual se revocó el Contrato de explotación de la plaza de toros y el oficio por medio del cual, se suspendió la venta de abonos y las novilladas en el marco del Festival de Verano, en el mismo fallo también se ordenó "restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina" (Sentencia T-296/13, 2013).

En esta oportunidad, el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza salvó su voto, dado que a su juicio, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar los actos administrativos. Sin embargo, lo que se destaca es el preámbulo de su disertación, en el que advierte que su

posición sobre el tema no está atada a su sentir personal (Sentencia T-296/13, 2013), precisión que en principio está demás hacerla, pero que confirma los postulados que se han venido planteando en este informe, cuando él mismo agrega: "Cabe esta precisión por cuanto no desconozco que este asunto claramente desborda el ámbito de lo meramente jurídico para ingresar en el proceloso universo de la conceptualidad en el que la opinión social exhibe matices la más de las veces irreconciliables, todos con sus 'muy fundadas' razones." (Sentencia T-296/13, 2013).

La forma en que redacta el magistrado Mendoza su salvamento, muestra que la decisión no se adoptó exclusivamente en derecho, sino que otros factores sociales, políticos y económicos motivaron la misma. Una vez más, en las posturas disidentes se observa la tensión que el tema genera al interior de la Corte, aun cuando nos encontramos en presencia de una Corte renovada, que ya había sentado su posición al respecto en una sentencia anterior.

En este momento histórico, la protección animal a quien la Corte parecía haberle dado un punto final, se convirtió en un atractivo para la clase política, pues al notar que la discusión realmente mueve masas que pueden aprovecharse electoralmente, y que afloraron sentimientos populistas, muchos candidatos oportunistas se valieron de estos hechos para alcanzar sus aspiraciones, situación que también sería aprovechada por la Corte que asume un rol político.

De una parte, se encuentran las corporaciones taurinas más importantes que son la de Manizales, Cali, Bogotá y Medellín, cuyo poder no tiene injerencia a nivel nacional, sino en lo local, y consiste en el monopolio de la organización de las fiestas bravas en esas ciudades, donde se mueve una economía informal que es importante para ellas. "En esa medida (...) sus dirigentes tienen la posibilidad de legitimarse ante las autoridades locales y la ciudadanía

como generadores de empleo, y es impopular para los alcaldes emprender acciones para desincentivar las corridas" (Hernández C. , 2017).

Pero en la otra parte, se encuentran las corrientes que defienden a los animales o llamados animalistas, integradas por una nueva masa de juventudes que igualmente llama la atención de los políticos, que convierten esta puja en un escenario más del populismo propio de la clase política en época electoral.

En ese sentido, en el año 2014, luego del espaldarazo que la Corte Constitucional en sede de revisión le dio a la fiesta brava en Bogotá, El Espectador reveló que en el concejo de esa ciudad se presentó un "proyecto de acuerdo para quitarle la vocación taurina a la Plaza de Toros", pues a juicio del concejal Hosman Martínez:

Los sujetos que presencian hechos violentos, en especial los niños y jóvenes, tienden a imitar estos comportamientos en el futuro, por lo que debemos elevar una ética política y una conciencia ciudadana responsable frente a otros seres sintientes. Queremos una Plaza de La Santamaría para la vida, la cultura y el deporte. (El Espectador, 2014).

Hasta este punto, se ha demostrado cómo la Corte Constitucional, a través de la modulación de sus fallos, muestra resistencia hacia la protección de los animales, llegando a desconocer su propio precedente.

En una primera fase (2003-2009), esta Corte se abstuvo de definir la categoría jurídica que ostentarían los animales en el ordenamiento jurídico colombiano, amparado en el respeto a la libertad de configuración del legislador, donde preponderó el derecho a las manifestaciones artísticas, pasando por encima del padecimiento de los animales inclusive; y en una segunda fase (2012), recurrió a los mismos argumentos abstencionistas, a sabiendas que en el año 2010 esa misma Corte había categorizado a los animales como seres sintientes, conforme se explicará posteriormente.

En igual sentido, se pusieron en evidencia las tensiones generadas al interior de la Corte, y de ésta con las demás ramas del poder, al crear una situación de inseguridad jurídica en el país, en la que solo ella aportaba la solución. Es decir, que la Corte tomó decisiones y dejó de tomarlas frente al mismo caso, basada en criterios subjetivos, que terminan desestabilizando el concepto constitucional de protección animal, imponiendo un poder absoluto sobre el tema de decisión.

2.2.2. Sentencias interpretativas o condicionales: Construcción jurisprudencial de la concepción de los animales como seres sintientes. Las sentencias manipulativas surgen por la necesidad de llenar los vacíos legislativos generadores de mayor inconstitucionalidad, donde se decide mantener la ley en el ordenamiento, pero con la adaptación interpretativa que estime conveniente el intérprete. La profesora Escobar, explica que ésta tipología va más allá de un simple pronunciamiento acerca de la conformidad o no con la Constitución de las normas, que pueden extraerse de una disposición enjuiciada, pues con ellas, el Tribunal Constitucional construye una nueva norma, que no es el resultado de la interpretación. La autora establece que en esos eventos, la interpretación "viene impuesta por la Constitución para conservar la validez de la disposición, aunque finalmente esa norma nueva es presentada como un significado de la disposición impugnada" (Escobar, 2006, págs. 82-83).

Dentro de esta tipología, se encuentra que las sentencias Interpretativas o Condicionales como aquellas que desplazan una de las posibles interpretaciones, pero mantiene la eficacia normativa de la misma (Olano, 2004, pág. 577).

A lo largo de este trabajo se ha indicado que el Estatuto Nacional de Protección Animal, constituye el primer espacio de reconocimiento a la protección de los animales. Sin embargo, también se ha dicho que él mismo exceptuó las prácticas de rejoneo, coleo, las corridas de toros,

las novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos de dicha protección, excepción que fue declarada constitucional en el entendido que mientras el legislador no la derogue, los animales que participen de dichas prácticas deberán recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor que padecen durante el curso de las mismas, teniendo en cuenta que los animales son seres sintientes.

Esta exequibilidad condicionada se produjo en el 2010, cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia C-666 de 2010 con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, como resultado de la demanda de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 7º del ENPA en el que se señaló la excepción descrita anteriormente, excepción que se materializa en la inaplicación de las sanciones administrativas previstas para aquellas personas que, en términos del artículo 6 del citado Estatuto, desplieguen tratos crueles hacia los animales cuando se trate de tales actividades.

Siendo así, la categoría de seres sintientes se articuló con el concepto de constitución ecológica propuesto desde el año 1992, para otorgar a los animales un *status* especial en el ordenamiento jurídico colombiano como sujetos de especial protección, distinto del que tenían atribuido desde un principio con el código Civil. De esta manera, la Corte entiende que la fauna se debe proteger del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima, protección última que refleja, un contenido de moral política y conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de los *otros* seres sintientes (Sentencia C-666/10, 2010).

Así mismo, en la parte resolutive de esta sentencia, la Corte insinuó al Congreso la necesidad de regular aquellas actividades en que se maltrata a los animales, con el fin de evitar un olvido absoluto del referido deber constitucional.

Cabe resaltar que el ponente de esta sentencia fue el magistrado Humberto Sierra Porto, quien en los anteriores fallos analizados salvó su voto, expresando con vehemencia su rechazo a las corridas de toros por cuanto constituían un evidente caso de maltrato animal, que atentaban contra los mandatos constitucionales de protección animal.

Vale la pena mencionar que en efecto, fue tan alta la expectativa generalizada frente a los resultados de este proceso, que el entonces presidente de la Sociedad Protectora de Animales, a través del memorial de fecha 31 de Enero de 2010 dirigido al proceso D-7963, exaltó los criterios expuestos por el magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto en los salvamentos de voto de las sentencias C-1192 de 2005, C – 367 de 2006, en donde consideraban la actividad taurina como una forma de maltrato animal, coincidiendo plenamente con los de dicha Sociedad. (Expediente D-7963-Sentencia C-666/10, 2010, págs. Folios 118-119).

Pese a esto, la Corte declaró la constitucionalidad de la norma, siempre y cuando los animales que participen en esas prácticas reciban protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el curso de las mismas y "se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna" (Sentencia C-666/10, 2010).

Una vez más, las posturas disidentes se presentaron dando cuenta de las tensiones institucionales generadas en torno a la protección de los animales. Tal y como venía sucediendo, frente a una decisión en donde se debatió un tema tan sensible para la nación y para la opinión pública, los magistrados María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio presentaron salvamento de voto de forma conjunta; el magistrado Gabriel Mendoza Martelo también salvó

su voto; mientras que Diego López Medina, quien fungió como conjuez, y Nilson Pinilla Pinilla manifestaron aclarar su voto.

En el salvamento de voto de María Calle Correa³ y Jorge Palacio Palacio⁴, quienes no participaron de las deliberaciones de los años 2005 y 2006, expresaron conjuntamente que se apartaban de la decisión adoptada por la mayoría en la sentencia C-666 de 2010, considerando que la norma acusada ha debido ser declarada inconstitucional por la protección de los animales frente al sufrimiento y el dolor innecesario.

En ese entendido, afirmaron de manera categórica que tal decisión se ha debido tomar con efectos diferidos, por respeto a la confianza legítima que tienen poblaciones y regiones en Colombia para poder seguir practicando ciertas actividades tradicionales, de las que dependen en algunos casos, la profesión, el oficio o el mínimo vital de muchas personas, y que implican una limitación del derecho al ambiente antes mencionado.

Con expresiones contundentes, que evidencian las tensiones generadas al interior de la Corte, acerca de la postura asumida por el ponente, tacharon de “*tibia y poco garantista*” la decisión adoptada por la mayoría de la Corte (Sentencia C-666/10, 2010), pues a juicio de los disidentes, una vez más, el ordenamiento jurídico colombiano se doblegó frente a los tratos crueles hacia los animales, quienes tienen derecho a ser protegidos por el simple hecho de ser seres sintientes.

Por su parte, el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo también salvó su voto, en cuya disertación reveló el contexto en que la Corte moduló su fallo, al manifestar que el asunto en discusión gira mayormente alrededor de aspectos sociológicos, atañedores a prácticas y costumbres respecto de las cuales el ingrediente conceptual juega un papel preponderante, al

³ Ingresó a la Corte el 24 de abril de 2009.

⁴ Ingreso a la Corte el 1º de marzo de 2009.

punto de ser el contexto en el que se desenvuelven los diversos criterios para cualquier toma de decisión.

La anterior circunstancia, se resalta para efectos de evidenciar la imposibilidad que tenía la Corte de conjeturar jurídicamente acerca de la definición, en uno u otro sentido, de la situación social cuya evaluación, ponderación, estructuración y determinación debe partir de la intervención del órgano legislativo, como lo venían manifestando desde el año 2005 (Sentencia C-666/10, 2010).

Curiosamente, y es menester mencionarlo para efectos del presente trabajo, la aclaración de voto del conuez Diego López Medina no reposa en el Expediente D-7963, de ello da cuenta, la Secretaria General de la Corte Constitucional de Colombia a través de la respuesta a la petición del autor de este trabajo, radicada en la Corte el 09 de junio de 2016.

En cuanto a la actividad legislativa del Congreso colombiano, como reflejo de la constitucionalidad modulada del artículo 7º del ENPA se radicaron alrededor de ocho proyectos de ley, de los cuales solo uno resulto sancionado.

El 21 de Mayo de 2010 se radicó el proyecto de ley por medio de la cual se modifica la Ley que regula los vehículos de tracción animal, en cabeza del ex congresista Javier Enrique Cáceres Leal, que buscaba modificar la prohibición de la prestación del servicio público de vehículos de tracción animal, por tanto no hace diferenciación con aquellos servicios que prestan los cocheros, que son considerados servicios turísticos e históricamente aceptados; este proyecto fue retirado por su mismo autor.

Más adelante, nuevamente el ex senador Javier Enrique Cáceres Leal, el 2 de agosto del 2010 volvió a radicar el proyecto de ley bajo el mismo nombre, esta vez con una modificación en la finalidad del mismo, debido a que pretendía reglamentar el tránsito de vehículos de

tracción animal en sectores urbanos. Sin embargo, el proyecto fue archivado en debate en el año 2012.

Por su parte, el ex senador Camilo Armando Sánchez Ortega presentó dos proyectos de ley el 8 de septiembre de 2010. El primero abogaba por penalizar la participación, promulgación o publicación de actos de crueldad o torturas contra los animales; y el segundo que se titulaba “Por la cual se establecen sanciones económicas y penales a quienes generen sufrimiento, muerte o alteren el desarrollo normal del Oso de Anteojos (*Tremarctos ornatus*) de manera indiscriminada y se dictan otras disposiciones concernientes a la protección de la especie y los ecosistemas que esta habita”. Ambos proyectos fueron archivados por tránsito de legislatura.

Al año siguiente, se radicó el proyecto de ley “Por medio de la cual se prohíbe el uso de animales silvestres, ya sean nativos o exóticos en circos fijos e itinerantes” el 10 de agosto de 2011, por un grupo de congresistas conformado por Augusto Posada, Guillermo Rivera Flórez, Jimmy Javier Sierra Palacio, Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Alfonso Prada Gil, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, Hernando Hernández, Juan Carlos Salazar Uribe y Juan Diego Gómez Jiménez que tenía como finalidad proteger a los animales que eran usados en circos.

En ese periodo legislativo (2011-2012), luego de numerosos e infructuosos intentos, este proyecto se convirtió en ley en el año 2013 bajo la nomenclatura 1638 de 2013, por medio del cual, se prohibió el uso de animales de cualquier especie en espectáculos de circos itinerantes, sin importar su denominación en todo el territorio nacional.

Durante esa misma legislatura, se radicó otro proyecto de ley titulado “Por medio de la cual se penaliza el maltrato animal y se dictan otras disposiciones” el 7 de Septiembre de 2011, por un grupo de congresistas conformado por Hernando José Padauí Álvarez, Augusto Posada Sánchez, Carlos Abraham Jiménez López, y Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, quienes

esperaban darle a los animales, en todo el territorio nacional, el reconocimiento de seres vivos sintientes y por ello recibirían especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el ser humano. Pese a los intentos por sacar adelante esta nueva categorización para los animales, reflejo de los conceptos jurisprudenciales planteados por la Corte Constitucional en la sentencia C-666 de 2010, este proyecto de ley fue archivado por tránsito de legislatura.

De esta manera, se ratifica la tensión interinstitucional de los órganos del poder público de Colombia. Por un lado, un juez constitucional que a través de la modulación de su fallo reconoció a los animales la categoría de seres sintientes, sin excluir del ordenamiento la excepción al maltrato en ciertas actividades consideradas artísticas; y del otro lado, la influencia económica, social y política que un gremio ejerce sobre los poderes públicos, que conociendo la necesidad constitucional de erradicar del ordenamiento jurídico las prácticas que atentan contra la protección animal, no lo hizo.

Esta aseveración es indubitable, pues se observa que a diferencia de los proyectos que buscaban acabar directa o indirectamente con la fiesta brava, en un solo proyecto a favor de la protección de los animales que participan en los circos se muestra una actividad fluida por parte del Congreso; como en efecto lo pondrían de precedente los demandantes de esa ley como se verá a continuación.

Al respecto, en un artículo denominado *Los superpoderosos de los toros* se reveló que el poder de influencia para legislar a favor de las corridas de toros están en cabeza del senador conservador Luis Emilio Sierra, procedente del departamento de Caldas, que de hecho, es el departamento en donde se ofrecen las fiestas taurinas más grandes del país; del senador Álvaro Uribe, cuyo hermano Santiago era dueño de la ganadería La Carolina, hasta hace poco

protagonista de las principales ferias del país; y del representante conservador por Boyacá, Humprey Roa, cuya familia tiene vínculos con la organización de corridas en ese departamento (Hernández C. , 2017).

En efecto, en el artículo periodístico *Las dos caras del negocio de la fiesta brava* se muestran las ganancias económicas que arrojan las corridas, desde la crianza del toro hasta los honorarios de los toreros y demás actores del ruedo, su impacto local en la hotelería, el transporte y la alimentación entre otros aspectos, lo que conlleva a enaltecer las posiciones políticas que se derivan de la discusión acerca de su permanencia en el país, especialmente por la afectación de los sectores en que se llevan a cabo tradicionalmente (Ortega, 2017).

Así mismo, en la nota denominada *Estos son los patrocinadores de las corridas de toros en Colombia*, se mostraron empresas grandes e influyentes en la economía del país como las patrocinadoras de la fiesta brava, entre las que se encuentran medios de comunicación como RCN Radio, CM& y Caracol Radio, además del Banco BBVA, La Cruz Roja y la revista Cromos (Contagioradio, 2017).

De acuerdo a lo anterior, como era de esperarse, se presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley 1638 de 2013 que prohibió el uso de animales en circos, la cual fue resuelta a través de la sentencia C- 283 de 2014 con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, quien había demostrado en fallos anteriores, su simpatía por la protección de los animales.

Para sustentar la petición de inconstitucionalidad, los demandantes argumentaron que los enunciados enjuiciados contrariaban la potestad de configuración legislativa del Congreso, y el principio de igualdad respecto de otras actividades como la tauromaquia.

El debate hasta aquí planteado no se generó en vano, pues la inseguridad jurídica frente al tratamiento de los animales en general, provocaba inquietudes como la esgrimida por los Actores en el expediente D-9776, que exhibe una sentencia de nulidad proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo del 25 de Marzo de 2004, en donde se declaró la nulidad de un acto por medio del cual se prohibía la presentación de animales salvajes y mamíferos marinos en los circos o espectáculos públicos, y se prohibía a los Alcaldes expedir permisos para espectáculos con animales silvestres o mamíferos marinos, debido a que el Concejo Distrital de Bogotá, desconoció la Constitución Política, excediendo la órbita de sus competencias en la materia (Expediente D-9776, 2004).

Igualmente, se consideró que desde la óptica de la convivencia, y la naturaleza de la medida que contiene el acto acusado, mencionado anteriormente, al Consejo Distrital de Bogotá no se le puede desconocer que fueron inspiradas por un loable propósito (Expediente D-9776, 2004, págs. 249-267).

Quienes presentaron la demanda, amparados en una decisión judicial de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, quedaban en desconcierto por el reconocimiento de los animales como seres sintientes, y por la promulgación de una ley que prohíbe el uso de animales en circos en contraste con la permanencia de la fiesta brava en Colombia. Este sentimiento estaba generalizado en todo el país, aspecto que no era ajeno para las publicaciones del portal web *Ámbito Jurídico*, donde consideraban que la preocupación por el tema, no solo había permeado al Congreso, sino también a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado, quienes se han pronunciado en diversas ocasiones sobre el tema (Cubides, 2014).

La Corte, luego de analizar el estado de los animales en los circos y la actividad circense, tanto en Colombia como en el resto del mundo, concluyó que esa práctica se constituía como

un componente de la cultura del país, pero destacó que el legislador se encuentra habilitado para limitar o prohibir algunas de estas manifestaciones en aras de proteger los intereses superiores, tal como el de los animales.

En ese mismo sentido, reiteró lo establecido en la sentencia C-666 de 2010, en el entendido que era menester proteger a los animales con la finalidad de conservar el medio ambiente, además de exigirse tal conducta respecto del ser humano en virtud a la dignidad que lo revestía. Sin embargo, resaltó que el deber constitucional que impide el maltrato animal no se puede tomar como un deber absoluto, toda vez que se debe armonizar con los principios y reglas de índole constitucional que resultaren contradictorias.

En síntesis, la Corte declaró exequibles los enunciados, puesto que a su juicio son el resultado de una voluntad política del legislador para proteger a los animales, considerado como el resultado fehaciente de la puja entre las ramas del poder, en donde las posiciones disidentes de una Corte mayoritaria acabarían por convertirse en la posición prevalente. Es decir, que el mensaje inserto en los debates formulados por la Corte Constitucional desde el año 2005 acerca del status jurídico que ostentan los animales en el ordenamiento colombiano, que repercutieron en la actividad legislativa, estaba tomando fuerza normativa y amparo jurisprudencial.

En ese mismo sentido, la Corte ratificó la categoría de seres sintientes y aclaró que las comparaciones dadas a los animales utilizados en actividades circenses y otros escenarios como por ejemplo zoológicos, acuarios, establos y demás, no eran parte de la discusión planteada, pues “el interés superior del medio ambiente implica también la protección de la fauna ante el padecimiento, el maltrato y la crueldad, lo cual refleja un contenido de moral política y conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de los otros seres sintientes” (Sentencia C-283/14, 2014).

Ahora bien, además del avance en la protección de los animales por la exequibilidad de una ley que evita el maltrato de éstos en los circos, lo significativo de esta sentencia es que, la Corte tomo su decisión con fundamento en el deber superior de protección animal, con el ánimo de conservar la naturaleza y exigir un comportamiento digno por parte del hombre.

Aunque en esta oportunidad no hubo salvamentos, si se presentaron tres aclaraciones de voto por parte de los magistrados María Victoria Calle Correa, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Iván Palacio Palacio, los cuales se expondrán, porque esbozan los puntos de vista en defensa de la construcción de una doctrina jurídica a favor de los animales, como antesala de lo que sucedería años más tarde.

En la aclaración de voto de la magistrada Calle Correa se consagró una propuesta intermedia a fin de reconocerle derechos a los animales, pues a su juicio la prohibición de usar animales en espectáculos circenses existía previo a la norma acusada, en tanto que en la Constitución Política al denotarse también como constitución ecológica, traía implícito la negativa de sufrimiento injustificado de los animales (Sentencia C-283/14, 2014). Por eso añadió, que siendo el reconocimiento de los derechos de los animales no humanos el tema más controversial debatido en el Tribunal Constitucional, un sector de la Corte no estaba de acuerdo, en tanto que había una ausencia de fundamentos morales y jurídicos, mientras que el otro proponía el reconocimiento pleno de los derechos de los animales.

La propuesta de Calle Correa se encaminó a expandir la comunidad moral; empero señaló una serie de dificultades que hacían que no se pudiesen reconocer derechos a los animales, tales dificultades eran: el concepto de dignidad humana, el concepto de los derechos fundamentales, la inexistencia de fuentes de derecho que justificaran los derechos de los animales, y otra serie de preguntas sin respuesta (Sentencia C-283/14, 2014).

Al respecto, la magistrada Calle Correa en mención a que existe una variedad de especies con marcadas diferencias, situación que imposibilita el reconocimiento uniforme de derechos, aunado a que existen animales que generan enfermedades al ser humano, se preguntó:

¿los animalistas están dispuestos también a defender sus derechos? Desde el punto de vista de la bioética, cómo debe actuar el hombre para evitar el sufrimiento de la presa cuando es cazada por el depredador. ¿Debe el ser humano interferir en el equilibrio natural y la evolución de cada especie?, ¿cuál debe ser el alcance de las restricciones que el ser humano puede imponer a los derechos de los animales no humanos?. (Sentencia C-283/14, 2014)

De otro lado, en la aclaración de voto conjunta de los magistrados Pinilla Pinilla y Palacio Palacio, expusieron que los animales no son individuos idénticos a los humanos y no tienen por qué serlo. Sin embargo, la constitución preserva las especies humanas y no humanas como parte del entorno ecológico, siendo posible extraer su protección como individuos al disponer variadas y similares capacidades y niveles de raciocinio. De las interacciones que los humanos tienen con los demás seres vivos, es claro que el hombre hace parte del mismo ecosistema, compartiendo análogas y diferentes necesidades básicas, que no se reducen a la condición de seres vivos y sintientes.

En la sentencia C-283 de 2014 se muestra una Corte que ha cambiado radicalmente la concepción de los animales frente al ordenamiento jurídico. Existe uniformidad de criterios al presentar un orden lógico argumentativo; y aunque no es definitivo para él, si permite inferir la relevancia institucional para la agenda del estado y el destino de la protección de los animales al interior de este.

En el año 2014, como muestra del apoyo al cambio en la percepción de la protección animal por parte de la Corte Constitucional de Colombia, se profirió la sentencia T-436 de 3 de julio de 2014, en la que se hizo un recuento cronológico de la posición de la Corte desde el año 2005 hasta el 2014. La sala de decisión concluyó, en relación con la protección de los animales,

que la jurisprudencia constitucional superó la percepción antropocéntrica y acogió una visión cosmocéntrica, “donde la relación ser humano y animal como ser sintiente y parte fundamental del medio ambiente es acorde con los preceptos de la denominada Constitución Ecológica”. (Sentencia T-436/14, 2014).

La sentencia referenciada se produjo por cuenta de una acción de tutela instaurada en el año 2013 por hechos que datan del año 2008, sobre dos leones sometidos a tratos crueles por los dueños de un circo. En este caso, se pronunció, tal y como consta en la Sentencia, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la presidió– Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en la revisión del fallo proferido por el Juzgado 5º Civil del Circuito de Bogotá D.C. del 17 de enero de 2014, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado 42 Civil Municipal de la misma ciudad de fecha 19 de noviembre de 2013.

De acuerdo a lo anterior, se deben destacar las fechas, pues nos permiten identificar dos efectos generados por el cambio del criterio frente a la protección animal en la jurisprudencia Colombiana: el primero de ellos se desprende de la evidente confianza que siente la ciudadanía colombiana para acudir a la jurisdicción constitucional a reclamar la protección animal, ello es sin duda, producto de la confianza legítima que empezó a brindar la Corte a partir del año 2010 cuando reconoció a los animales la categoría de seres sintientes.

El segundo, considerado uno de los puntos más importantes dentro del desarrollo de este trabajo, es que en esta ocasión la protección de los animales sí se encontraba dentro de los intereses de la Corte, pues seleccionó y falló una sentencia en sede de revisión de tutela en menos de 5 meses, concomitante con el trámite de la demanda de inconstitucionalidad de la ley que prohibió los animales en circos.

Para entonces, la Corte tenía claro que los mensajes inmersos en los salvamentos de voto de las sentencias C-1192 de 2005, C-115 de 2006, C-367 de 2006, C-761 de 2009 y C-899 de 2012, habían empezado a transformar los criterios determinantes para la protección de los animales, considerando que “actualmente existe una clara intención del legislador por acabar progresivamente con prácticas culturales en las cuales tradicionalmente se han usado animales y se ha comprobado que en desarrollo de las mismas son sujetos pasivos de tratos crueles e indignos” (Sentencia T-436/14, 2014).

En cuanto a la actividad legislativa del congreso de la Republica, como reflejo de estas decisiones, se presentaron tres proyectos de ley. Uno durante la legislatura 2012 -2013, y dos durante la legislatura 2014 – 2015.

De esta manera, el 21 de marzo de 2013 se radicó el proyecto de ley por medio del cual se expide el Estatuto de Protección y Bienestar Animal por los congresistas Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Camilo Armando Sánchez Ortega, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, Alfonso Prada Gil, Augusto Posada Sánchez, Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Juan Valdés y Nicolás Antonio Jiménez Paternina. El aludido proyecto buscaba establecer medidas individuales y colectivas de carácter social, administrativo, judicial, económico y ambiental, para la protección y bienestar de los animales. Este proyecto fue otro intento infructuoso por tutelar la protección de los animales, pues fue archivado por tránsito de legislatura el 20 de Julio del 2013.

Más adelante, en el periodo legislativo de 2014 a 2015, la dinámica respecto de las leyes de protección animal cambió, logrando en ese momento la radicación de un proyecto que posteriormente fue sancionado como ley.

En primer lugar se radicó el 14 de agosto de 2014 el proyecto de Acto Legislativo por medio del cual “se adiciona un inciso al artículo 79 de la Constitución Política, que hace

referencia a los Derechos de los animales”, en dicho proyecto se presentaron como autores Marco Aníbal Avirama Avirama, Hernando José Padauí Álvarez, Edgar Alexander Cipriano Moreno, Germán Bernardo Carlosama López, Carlos Abraham Jiménez López, Víctor Javier Correa Vélez, Armando Antonio Zabaraín D'arce, Efraín Antonio Torres Monsalvo, Eloy Chichi Quintero Romero, Luis Evelis Andrade Casama. Este proyecto de ley tenía por objeto *eleva a rango constitucional el reconocimiento de la fauna como seres sintientes, que hacen parte fundamental y vital del contexto ambiental en el que como seres humanos nos desarrollamos*. Dicho proyecto de Acto Legislativo fue archivado por vencimiento de términos el 16 de diciembre de 2014.

Por otra parte, el 4 de Septiembre de 2014 se radicó el proyecto de ley por medio del cual se modifica el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, a través del cual se tipifica el maltrato animal por parte de los congresistas Juan Carlos Lozada Vargas y Mauricio Salazar Peláez, quienes aunaron esfuerzos con el fin de que los animales como seres sintientes, recibieran especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual, se pretendía que en la naciente ley se tipificaran como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se estableciera un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial.

Durante el trámite para la expedición de ese proyecto de ley, una vez más los intereses particulares sobre este tema motivaron el actuar de los servidores públicos, esta vez se trató del senador Álvaro Uribe Vélez, quien deshizo el quorum de la plenaria del Senado para no votar el proyecto, en donde se hubiera podido comprometer penalmente el actuar de los ganaderos y vaqueros que maltratasen animales.

Aun cuando se sabía que las actividades económicas con animales como la ganadería y la piscicultura, el control de animales silvestres bravíos y salvajes, así como los espectáculos de tradición cultural con animales, como las corridas de toros, las corralejas, las riñas de gallos, o el coleo (Revista Semana, 2015) continuaban excluidas de la tipificación, salta a la vista que la tensión generada, surge por la inseguridad que venía promoviendo la Corte Constitucional sobre el caso de la tauromaquia, donde fácilmente podrían quedar comprometidas otras prácticas como la equina.

Pese a ello, el proyecto fue sancionado bajo el título de Ley 1774 del 6 de enero de 2016, y pasará a la historia como la ley que les dio el epíteto de seres sintientes a los animales.

Pero no todo estuvo dicho, pues a pesar de haber reconocido esa categoría, la ley no puso fin a la discusión que había iniciado una década atrás, pues como se indicó, la misma seguía exceptuando de la prohibición del maltrato animal a las prácticas de rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos, aspecto que se definiría más adelante por la Corte Constitucional.

2.2.3. Sentencias exhortativas: Deber de adecuar la legislación a partir de la aplicación indistinta a todos los animales como seres sintientes. Como fue enunciado, bajo el esquema de la politización de la justicia existen casos en los que el tribunal constitucional se abstiene de decidir y/o poner de presente una Corte vacilante, trasladando la carga al legislador, como ocurre con las sentencias exhortativas, toda vez que aun cuando el funcionario judicial sabe que está pasando la frontera de sus competencias, prefiere hacer creer al legislador que es él quien debe definir la situación, pero va acompañado de un elemento coactivo.

Las sentencias exhortativas evidencian que existe un riesgo de inconstitucionalidad, dentro de una situación actualmente constitucional. Por consiguiente, se hace un llamado al legislador para atender la situación dentro de un plazo determinado por la Corte, “con la consecuencia adicional de que si ello no ocurre, el Tribunal aplicará directamente el mandato constitucional en el futuro, pudiendo determinar la nulidad de la norma jurídica respectiva” (Olano, 2004, pág. 581).

De acuerdo a lo anterior, las soluciones del Tribunal Constitucional han sido cuestionadas, ya que se oponen a la libertad de configuración legislativa, pues aun cuando la Corte declara temporalmente constitucional la disposición enjuiciada, le impone al legislador una materia constitucional que debe ser legislada en “plazos razonables” (Sarmiento, 2012, pág. 297).

De esa manera, la Corte Constitucional profirió la sentencia C- 041 del 1º de febrero de 2017, con ponencia de los magistrados Gabriel Mendoza Martelo y Jorge Palacio Palacio, quienes abiertamente habían mostrado su posición a favor de la protección animal, a través de sus salvamentos de voto en casos estudiados por la Corte en otras oportunidades.

En esta sentencia se declaró la inexequibilidad del paragrafo 3º de la ley 1774 de 2016, en el que se exceptuaron de las penas a quienes adelanten las practicas de rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos, difiriendo los efectos por el término de dos años, para que el congreso adapte la legislación a la jurisprudencia constitucional; es decir, que quienes promuevan dichas prácticas, luego de los dos años contados a partir de la publicación de esta sentencia, incurrirán en las penas establecidas por la modificación al código penal.

En los mismos términos que se ha venido exponiendo, vale recordar que con la expedición de la sentencia C-666 de 2010 se generó un cambio en la mera de percibir los animales en Colombia. A partir de entonces se introdujo el deber de proteger a los animales por su condición de seres sintientes.

El contexto en que se expide esta nueva sentencia en el año 2017 es fundamental para comprender el giro que hace la Corte, no solo en su concepción frente a los animales, sino también por el cambio de jurisprudencia.

En primer lugar, hacia el año 2015, por primera vez en el país fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo una política pública que fomenta la protección animal, donde se contempla que “las entidades territoriales tendrán el deber de vigilar, controlar y fomentar el respeto por los animales y su integridad física y anímica” (El Espectador, 2015).

Del mismo modo, en el 2016 el legislador acogió la tesis según la cual, los animales son considerados como seres sintientes. En ese sentido se modificó el código civil y determinó que a partir de ese momento, no volverían a ser considerados como cosas en el ordenamiento jurídico colombiano. Así mismo se tipificó el maltrato animal como conducta punible.

En ese momento, la tensión generada por los taurófilos había alcanzado un grado tan alto, que las disposiciones administrativas que favorecían la fiesta brava eran calificadas por la opinión pública como políticamente incorrectas, tal como lo documentó la Revista Semana el día en que el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa adjudicó al Consorcio Taurino, representado por Felipe Negret, la temporada de toros del 2017 en la plaza de toros de Santamaría, porque dicha discusión se “ha convertido en fuente de electores y en bálsamo de popularidad” (Urrego, 2016).

Lo anterior quiere decir que desde finales del 2015, la protección animal pasó a ocupar un lugar muy importante en la agenda del Estado colombiano. La discusión que en silencio había tratado de controlar la Corte Constitucional, ahora se encontraba en las demás ramas del poder y era tema de la agenda pública, por supuesto, esta era la oportunidad indicada para convertir los salvamentos de voto, en la posición mayoritaria de la Corte, salvamentos de los que hablaba Negret en la entrevista concedida a Revista Semana.

Como era de esperarse, en esta ocasión, fueron los taurinos quienes alegaron la parcialización de una de las magistradas que participaría en la deliberación, alegando que el fin de la fiesta brava estaba cerca, citando que "en la acción se manifiesta que la actual presidenta de la Corte Constitucional presentó su posición personal sobre este tema en febrero de 2011 en un foro contra el maltrato animal" (El Espectador, 2017). Sin embargo, esta vez la Corte tampoco hizo caso a dichos señalamientos, y falló.

Para la Corte, el párrafo demandado relegó las pautas indicadas por la jurisprudencia en la sentencia C-666 de 2010, desprotegiendo a los animales de forma irrazonable y desproporcionada, pues como se había dicho, la percepción constitucional frente a la protección de los animales venía en constante evolución al mismo ritmo del legislador, razón por la cual, tuvieron en cuenta en su pronunciamiento lo que contenía el enunciado normativo donde se aluce que "termina reproduciendo contenidos materiales declarados inconstitucionales (art. 243 superior), todo lo cual genera un déficit de protección constitucional hacia los animales" (Comunicado No. 3, 2017).

Así mismo, difirió los efectos de la inexequibilidad por el término de dos años, teniendo en cuenta que los efectos que podría tener la desaparición inmediata de estas excepciones, respecto de intereses protegidos en el ordenamiento jurídico resultaban más gravosos. Por lo

tanto, exhortaron al Congreso para disponer lo necesario para adecuar la legislación a la jurisprudencia constitucional, y que de no expedirse la regulación en el término señalado, se cobre fuerza ejecutoria la inexequibilidad declara, es decir, que serán penalizadas aquellas personas que maltraten a los animales aun en prácticas de rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos.

En esta oportunidad, salvaron el voto los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos. Sin embargo, en la publicación hecha por la Corte, solo reposa el salvamento de este último magistrado, Alberto Rojas, quien inició su disertación con el interrogante: "¿Por qué nuestros amigos animales no tienen derechos?" (Sentencia C-041, 2017), a pesar de que en ningún aparte de su salvamento se refiere a la subjetividad jurídica del derecho de los animales.

Los disidentes fueron catalogados como *magistrados taurinos* en el artículo denominado: *Los superpoderosos de los toros*. En esta publicación se pone de manifiesto sus reconocidas posiciones a favor de la fiesta brava, y se advirtió que a diferencia de los *magistrados liberales*, a los taurinos aún les falta mucho tiempo para culminar su periodo constitucional. A su juicio, "Eso es relevante porque, por más que el balón hoy esté en manos del Congreso para que defina sobre el futuro de las corridas, cualquier demanda de inconstitucionalidad sobre lo que allí se decida volverá de nuevo a la Corte" (Hernández C. , 2017).

"Los antitaurinos le cobran a Guerrero que haya sido magistrado auxiliar y muy cercano al exmagistrado Rodrigo Escobar" (Hernández C. , 2017), quien al igual que Córdova Triviño, litigó a favor de la Corporación Taurina de Bogotá, después de terminar su periodo

constitucional como magistrado de la Corte Constitucional y fallar un caso a favor de la fiesta brava.

Finalmente, se concluye que la Corte Constitucional a través de la modulación de sus fallos, pasó la barrera de las competencias judiciales de manera progresiva, ingresando en el campo de la política mediante la decisión definitiva de proteger indistintamente a los animales, erradicando del ordenamiento jurídico la excepción al maltrato animal por cuenta de las que en algún momento se denominaron actividades culturales.

Indiscutiblemente, esta decisión de la Corte no fue bien recibida por el gremio taurino, pues les dieron un ultimátum a sus prácticas. En efecto, la Representante a la Cámara por partido Centro Democrático, Margarita Restrepo, radicó un proyecto de ley que propone la expedición de un nuevo reglamento nacional taurino, a través del cual se pretende ajustar la legislación a los preceptos señalados por la sentencia C-666 de 2010, ignorando por completo la reciente C-041 de 2017 (Ambito Jurídico, 2017).

Mientras que, el proyecto de ley que busca eliminar la realización de corridas de toros en el país fue presentado por el Gobierno Nacional y no como iniciativa del legislador, así como lo sugirió la sentencia, lo cual sigue evidenciando la tensión que este tema genera entre el poder judicial y el legislativo. Sin embargo, actualmente en Colombia es una realidad que la Corte Constitucional acabó con la fiesta brava.

Como las opiniones no se hicieron esperar, la Revista Semana publicó un artículo denominado *El circo que creo el fallo de la corte constitucional sobre toros*, donde descubren la posición de la Corte y dejan ver cómo se ha politizado la justicia constitucional en el país, al respecto señalaron:

"En su afán por sacar un fallo populista frente a los toros, la Corte Constitucional borró con el codo sus sentencias anteriores y quedó en un pantano jurídico. Ahora tiene

en vilo el futuro del coleo, las corralejas, las peleas de gallos y otras expresiones culturales de todo el país". (Revista Semana, 2017)

En lo sucesivo, resultará importante dedicarse al análisis en contexto de los fallos de la Corte Constitucional, pues como se ha demostrado a lo largo de esta investigación, la mayoría de las veces, sin distinción de ubicación geográfica o trayectoria que los tribunales constitucionales puedan tener, en el ejercicio del control de constitucionalidad traspasan la barrera que limita sus competencias; preocupación que ya está en mira de la opinión pública, pues recientemente en el artículo denominado: "Más allá de la religión de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional" de El Espectador, se muestra el temor a los cambios jurisprudenciales producto de las variables internas y externas que puedan generar sus actores políticos (Medellín, 2017).

Conclusiones

A lo largo de esta investigación se analizaron las sentencias en contexto, aquellas que la Corte Constitucional de Colombia asumiendo un rol político, profirió para cambiar la concepción de los animales hacia la de *seres sintientes* en el ordenamiento jurídico colombiano.

En consecuencia, se analizó la jurisprudencia constitucional desde un punto de vista realista, a través de la interrelación de variables internas y externas y como resultado de esto, fue necesario estudiar la evolución del concepto que la Corte tenía sobre el status de los animales en el ordenamiento jurídico colombiano, principalmente por medio del control de constitucionalidad del Reglamento Nacional Taurino y del Estatuto Nacional de Protección Animal, entre otras leyes

Adicionalmente, se estudiaron las reacciones del Congreso y la posición asumida por el ejecutivo en contraste con la opinión pública a partir de la argumentación de los magistrados disidentes en los salvamentos de voto, para ello fue igual de necesario el análisis de los expedientes de las sentencias expuestas, la actividad legislativa de la época y los reportes noticiosos que mostraron la influencia del gremio taurino, las tensiones que este generaba al interior de la Corte y la reacción de las otras ramas del poder público, en donde se introdujo de manera paulatina el concepto de animales como seres sintientes en Colombia.

Así mismo, se estableció que al hablar de interrelación entre variables internas y variables externas, se produce una interacción entre el tribunal constitucional y las otras ramas del poder público, que supone la aplicación de la técnica de modulación de sentencias para legitimar las decisiones políticas contenida en sus fallos. En síntesis, se sustenta que toda interacción del tribunal constitucional como producto de su rol político le impone modular sus fallos, pero no toda modulación significa una decisión política.

De acuerdo a lo anterior, se afirma que los jueces legitiman su jurisprudencia como fuente formal de derecho a partir de la intromisión de estos sobre las otras ramas del poder público, desbordando así sus facultades de administración de justicia, al traspasar el límite de lo jurídico sobre las políticas públicas –en principio propias del orden democrático-liberal-, intromisión que se consolida a partir de la ideología y la estructura institucional, y no a partir de la invocación de los derechos y garantías individuales, o la estructura democrático-liberal de la Constitución, que limita los abusos de poder por parte del Estado y promueve la igualdad ante la ley.

Esos pronunciamientos de los jueces, en el marco de las relaciones institucionales, no obedecen a la preservación de los derechos, sino al ejercicio político que experimentan desde la coerción de la administración de justicia.

En este caso de estudio, se entendió que la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad, tomó como punto de partida la *Constitución ecológica* reconocida jurisprudencialmente desde 1992 para introducir el concepto de *seres sintientes* al referirse a los animales en Colombia.

Años más tarde, a través de varios estudios de constitucionalidad a los que fue sometido el Reglamento Nacional Taurino luego de su promulgación, una Corte que actuó bajo la influencia de los taurófilos, marcó tendencia con una técnica de modulación abstencionista, con la cual, en tres fallos consecutivos le dio preponderancia a la libertad de configuración del legislador, aspecto que permitió que en el ordenamiento jurídico colombiano permaneciera la conservación de prácticas culturales como la tauromaquia o las peleas de gallos, sobre la protección de los animales.

No obstante, en los salvamentos de voto presentados desde el año 2005 se denunció abiertamente la presión que venían ejerciendo los gremios favorecidos con estas prácticas sobre el Congreso, pero también sobre la misma Corte, pues varios de sus magistrados y miembros de las élites políticas del país en ese entonces eran taurófilos.

Así mismo, se mostró que el gremio afín con la tauromaquia era el empoderado en la defensa de las llamadas tradiciones artísticas, en donde las peleas de gallos y otras actividades relacionadas con la puesta en escena de animales, simplemente se adherían, pues no tenían la relevancia suficiente para lograr un espacio en la agenda de discusiones de los poderes públicos del país.

Posteriormente, en el año 2010 se produjo la modulación condicionada del Estatuto Nacional de Protección Animal -reconocido como el primer espacio de protección de los animales en Colombia-, en el cual se exceptuó de la protección al maltrato las prácticas de rejoneo, coleo, las corridas de toros, las novilladas, corralejas, becerradas, tientas, así como las riñas de gallos de dicha protección; excepción que fue declarada exequible en el entendido que, mientras el legislador no la derogue, los animales que participen de dichas prácticas deberán recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor que padecen durante el curso de las mismas, teniendo en cuenta que los animales son seres sintientes.

Pese a los intentos de cambiar el paradigma de los animales en el ordenamiento jurídico colombiano, la postura asumida por el ponente de turno fue tachada de “*tibia y poco garantista*” (Sentencia C-666/10, 2010), pues la excepción frente al maltrato animal se mantuvo en el ordenamiento.

Como producto de este fallo condicionado, el Congreso prohibió el uso de animales en espectáculos de circos en todo el territorio nacional, aspecto que ratificó la influencia del gremio

taurino sobre los poderes públicos que hasta entonces era intocable, aun conociendo la necesidad constitucional de erradicar del ordenamiento jurídico las prácticas que atentan contra la protección animal.

Más adelante, en el periodo legislativo de 2014 a 2015, el Congreso declaró a los animales como seres sintientes y penalizó el maltrato animal. Sin embargo, seguía exceptuando de la prohibición de dicho maltrato a las prácticas artísticas y culturales ya señaladas.

De todo ello se infiere que desde finales de 2015, la protección animal pasó a ocupar un lugar muy importante en la agenda del Estado colombiano. La discusión que a través del abstencionismo había tratado de controlar la Corte Constitucional, ahora se encontraba en las demás ramas del poder y en el ojo público, dando paso a una nueva oportunidad para convertir, los salvamentos de voto de los primeros fallos en la posición mayoritaria de la Corte.

Finalmente, este año (2017) la Corte dio un giro determinante en su argumentación y modo de concebir a los animales, declaró inexecutable la norma que exceptuó de las penas previstas para las prácticas de rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos, exhortando al Congreso para que en el término de dos años adapte la legislación a la jurisprudencia constitucional; es decir, que quienes promuevan dichas prácticas, luego de los dos años contados a partir de la publicación de esa sentencia, incurrirán en las penas establecidas por la modificación al código penal, erradicando del ordenamiento jurídico la excepción al maltrato animal por cuenta de las que en algún momento se denominaron actividades artísticas y culturales.

Así las cosas, se concluye que la Corte Constitucional de Colombia a través de la modulación de sus fallos, de manera paulatina pasó la barrera de las competencias judiciales,

ingresando en el campo de la política mediante la decisión definitiva de proteger indistintamente a todos los animales.

Bibliografía

- Ambito Jurídico. (10 de abril de 2017). Un nuevo Reglamento Nacional Taurino podría ser aprobado en el Congreso. Recuperado el 15 de 06 de 2017, de <https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/constitucional-y-derechos-humanos/un-nuevo-reglamento-nacional-taurino-podria-ser-aprobado-en-el-congreso>
- Ansolabehere, K. (2005). Jueces, Política y Derecho: Particularidades y alcances de la politización de la justicia. *Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*, 22. Recuperado el 2017, de <http://www.redalyc.org/pdf/3636/363635644003.pdf>
- Auto 188A/05, Expediente D-5919 (Corte Constitucional 8 de septiembre de 2005).
- Barreto, A. (2011) La Generacion del Estado de Sitio. Universidad de los Andes.
- Cajas, M. A. (2015). Como construir una narrativa de la Corte Suprema de Justicia en Colombia en una perspectiva histórica y política. En Universidad de los Andes, Universidad ICESI, & C. M (Ed.), *La historia de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, 1886-1991* (pág. 25). Bogotá.
- Cárdenas, A., & Fajardo, R. (2007). *El derecho de los animales*. Bogotá: Legis.
- Comunicado No. 3, Expediente D-11443 AC- Sentencia C-041/17 (Corte Constitucional 1 de febrero de 2017). Recuperado el 09 de mayo de 2017, de <http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2003%20comunicado%2001%20de%20febrero%20de%202017.pdf>
- Contagioradio. (5 de febrero de 2017). *Contagioradio- Actualidad de Colombia y el mundo en temas de derechos humanos, paz, política, movimientos sociales*. Recuperado el 29 de mayo de 2017, de <https://www.contagioradio.com/estos-son-los-patrocinadores-de-las-corridas-de-toros-en-colombia-articulo-35784/>
- Cubides, A. d. (02 de octubre de 2014). *Derechos de los animales: ¿una posibilidad jurídica?* Recuperado el mayo de 2017, de Ámbito Jurídico: <https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Educacion-y-Cultura/noti141002-04-derechos-de-los-animales-una-posibilidad-juridica>
- El Espectador. (02 de septiembre de 2014). Llego la hora de la consulta popular: animalistas.
- El Espectador. (29 de abril de 2015). Política pública para la defensa de los animales se incluye en el PND. *El Espectador*.
- El Espectador. (30 de enero de 2017). Recusación contra Magistrada frenaría debate sobre las corridas de toros en la Corte. *El Espectador*.

- El Espectador, S. J. (04 de febrero de 2015). Corte deja en firme fallo que revive corridas de toros en Bogotá. *El Espectador*. Recuperado el mayo de 2017, de <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-deja-firme-fallo-revive-corridas-de-toros-bogota-articulo-542075>
- Escobar, L. M. (2006). El recurso de inconstitucionalidad y el triunfo de la minoría política en España. ¿Mito o realidad? *Revista de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas de la universidad del Norte*(26), 63-88. Obtenido de https://doctrina.vlex.com.co/source/ciencias-juridicas-2696?_ga=2.218193305.1813121692.1496463677-26548306.1496463677
- Escobar, L. M. (Julio-Diciembre de 2006). La modulación de sentencias. Una antigua práctica europea. *Vniversitas- Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana*, 91-110.
- Escobar, L. M. (2007). La actividad judicial. El texto frente a la realidad. *Vniversitas- Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana*, 56(114), 291-318.
- Expediente D-5919 (Corte Constitucional Colombiana 2006).
- Expediente D-7963-Sentencia C-666/10 (Corte Constitucional de Colombia 30 de agosto de 2010). Obtenido de <http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2044%20Comunicado%2030%20de%20agosto%20de%202010.php>
- Expediente D-9776 (Corte Constitucional 25 de marzo de 2004).
- Garrido, R. (04 de 01 de 2014). Corridos y política. *El Universal*. Obtenido de <http://www.eluniversal.com.co/blogs/vida-diaria/corridos-y-politica>
- González, J. (2006) El problema de las fuentes del derecho: una perspectiva desde la argumentación jurídica. *Vniversitas de la Universidad Javeriana* 265-293
- Hernández, A. (2013). La Fiesta en Corralejas: las contradicciones de un patrimonio no patrimonializable. *Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia*, 28-46. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/557/55730873008.pdf>
- Hernández, C. (19 de febrero de 2017). Los superpoderosos de los toros. *La Silla Vacía*. Colombia. Recuperado el 11 de marzo de 2017, de <http://lasillavacia.com/historia/los-superpoderosos-de-los-toros-59799>
- Hilbink, L. (2014). Jueces y política en democracia y dictadura. Lecciones desde Chile. (T. F. Zapata, Ed.) *Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte*, 23(1), 291-299.

- Kennedy, D. (2002). La crítica de los derechos (en Critical Legal Studies). (J. Gonzalez Bertomeu, Trad.) Obtenido de <http://duncankennedy.net/documents/La%20critica%20de%20los%20derechos%20en%20cls.pdf>
- Kennedy, D. (1999). Libertad y restricción en la decisión judicial, el debate con la teoría crítica del derecho (CLS). *Siglo del hombre editores*.
- Lamprea, E (2009). Independencia judicial y rendición de cuentas en la nominación de candidatos a la Corte Constitucional colombiana. *Revista de derecho público* 23 de la Universidad de los Andes, 3-9.
- López Medina, D. (junio de 2006). El sueño Weberiano; claves para una comprensión constitucional de la estructura administrativa del Estado colombiano. *Revista de derecho público de la Universidad de los Andes*.
- Lopez, D. (2001). *El derecho de los jueces*. LEGIS.
- Medellín, M. J. (10 de mayo de 2017). Más allá de la religión de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional. *El Espectador*. Obtenido de <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/mas-alla-de-la-religion-de-los-nuevos-magistrados-de-la-corte-constitucional-articulo-693242>
- Novick, S. M. (1995). The Collected Works of Oliver Wendell Holmes: Complete Public Writings and Selected Judicial Opinions of Oliver Wendell Holmes. *University of Chicago Press, III*.
- Olano, H. A. (2004). Tipología de nuestras sentencias constitucionales. *Vniversitas de la Universidad Javeriana*, 53(108), 571-602.
- Ortega, C. (25 de enero de 2017). Las dos caras del negocio de la "fiesta brava". *Portafolio*.
- Pastori, D. (02 de diciembre de 2016). "Ganaderos fueron víctimas de las Farc": Ordóñez. *El Heraldo*. Recuperado el junio de 2017, de <https://www.elheraldo.co/politica/ganaderos-fueron-victimas-de-las-farc-ordonez-307848>
- Portela Valentín, O. G. (2015). *Tesis Doctoral "Oliver Wendell Holmes Jr. y su obra: Una fusión sistemático-existencial" dirigida por el Dr. Francisco Caballero Harriet*. Facultad de derecho de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
- Revista Dinero. (19 de febrero de 2012). Corridas de toros en Colombia: ¿morirán de viejas? *Revista Dinero*. Recuperado el mayo de 2017, de

<http://www.dinero.com/actualidad/articulo/corridas-toros-colombia-moriran-viejas/145116>

Revista Semana. (05 de julio de 2009). A la guillotina con Gustavo Gómez. *Revista Semana*.

Revista Semana. (27 de noviembre de 2015). Uribe y los caballos que tienen frenada la ley de maltrato animal. *Revista Semana*. Recuperado el mayo de 2017, de <http://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-los-caballos-que-tienen-frenada-la-ley-de-maltrato-animal/451395-3>

Revista Semana, S. d. (11 de febrero de 2017). El circo que creó el fallo de la Corte sobre toros. *Revista Semana*.

Sarmiento, J. P. (2010). La modulación de sentencias de la Corte Constitucional: ¿juez natural para la responsabilidad del Estado legislador? *Precedente*, 227-258.

Sarmiento, J. P. (2012). La modulación de sentencias como medio para articular la oportunidad política de la Corte Constitucional colombiana. El caso de las parejas del mismo sexo. *Revista de Derecho de la Universidad del Norte*, 283-320.

Sarmiento, J. P., Mariño, C., & Aguilar, E. (2015). Actividad legislativa sobre derechos de los animales. *Caribe Visible*(Boletín informativo No. 9). Barranquilla, Barranquilla, Colombia. Recuperado el 23 de abril de 2017, de <http://www.uninorte.edu.co/documents/1521176/0/2015+-+Actividad+legislativa+sobre+derechos+de+los+animales/02eb8065-4bd2-4ba6-b604-573c0739be8b?version=1.2>

Sentencia C - 666, Expediente D-7963 (Corte Constitucional 30 de Agosto de 2010).

Sentencia C-041 (Corte Constitucional de Colombia 2017).

Sentencia C-115/06, Expediente D-5919 (Sala Plena de la Corte Constitucional 22 de febrero de 2006).

Sentencia C-1192/05, Expediente D-5809 (Sala Plena de la Corte Constitucional 22 de noviembre de 2005).

Sentencia C-283/14, Expediente D- 9776 (Corte Constitucional 14 de Mayo de 2014).

Sentencia C-355 de 2003, Expediente D-4314 (Sala Plena de la Corte Constitucional 06 de Mayo de 2003).

Sentencia C-367/06, Expediente D-6013 (Sala Plena de la Corte Constitucional 16 de mayo de 2006).

Sentencia C-666/10, Expediente D-7963 (Sala Plena de la Corte Constitucional 30 de Agosto de 2010).

Sentencia C-761 de 2009, Expediente D-7683 (Sala Plena de la Corte Constitucional 29 de Octubre de 2009).

Sentencia C-889/12, Expediente D-9027 (Sala Plena de la Corte Constitucional 30 de octubre de 2012).

Sentencia No. T-411/92, Expediente No. T-785 (Juzgado Primero de Instrucción Criminal de Granada (Meta) 17 de Junio de 1992).

Sentencia T-296/13, Expediente T- 3758508 (Corte Constitucional de Colombia 22 de mayo de 2013).

Sentencia T-436/14, Expediente T-4.265.190 (Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional 03 de julio de 2014).

Sentencia T-760/07, Expediente T-1398036 (Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional 25 de septiembre de 2007).

T-436 de 2014, T-4.265.190 (Corte Constitucional de colombia 3 de Julio de 2014).

Urrego, R. (20 de octubre de 2016). Peñalosa y los toros: ¿estocada o cambio de tercio? *Revista Semana*. Recuperado el mayo de 2017, de <http://www.semana.com/nacion/articulo/corridas-de-toros-en-bogota-alcalde-penalosa-propone-eliminar-la-muerte-del-toro/499657>

Vargas, C. I. (enero-junio de 2011). La función creadora del tribunal constitucional. *Revista Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia*, XXXII(92), 11-33.